

**RESOLUCIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_**

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

**El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 47 del Decreto 2811 de 1974, los numerales 1, 2, 11, 19, 23, 24 y 40 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011 y,**

**CONSIDERANDO:**

**1. CONSIDERACIONES GENERALES**

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; proteger la diversidad e integridad del ambiente; conservar las áreas de especial importancia ecológica; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación y restauración; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados. Igualmente, consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

Que en los artículos 1 y 7 de la Constitución Política se define el carácter pluralista del Estado y se reconoce y establece el deber de protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Que de conformidad con los artículos 332 y 334 de la Constitución Política, el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables y tiene a cargo la dirección general de la economía, por tanto, este intervendrá en la explotación de los recursos naturales con el fin de conseguir, en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la preservación de un ambiente sano, entre otros fines.

Que el artículo 2° del Decreto Ley 2811 de 1974 "*Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*" (Código de Recursos Naturales) establece como objetivos del Código de Recursos Naturales: "1.- *lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables según criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional*; 2.- *Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos*; y 3.- *Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente*".

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

Que el artículo 45 del Decreto Ley 2811 de 1974 "*Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*" (Código de Recursos Naturales), señala que las reglas a las que debe ajustarse la actividad administrativa en relación con el manejo de los recursos naturales renovables, de las cuales resalta la del literal b: "*Se mantendrá una reserva de recursos acorde con las necesidades del país. Para cumplir esta finalidad, se podrá hacer reserva de la explotación de los recursos de propiedad nacional (...)*"

Que el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables establece que: "*Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a particulares*".

Que la Ley 74 de 1979 aprobó el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978, según el cual las partes contratantes "*convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios*" (artículo 1º).

Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T de 1989, en cuyo artículo 2º se establece la obligación de los Estados Parte de desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar el respeto de su integridad.

Que en cumplimiento del artículo 55 transitorio de la Constitución Política se expidió la Ley 70 de 1993, con el propósito de reconocer el derecho de propiedad colectiva a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y otras zonas del país que presenten similares condiciones, y establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 1º, establece que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y que la política ambiental colombiana seguirá, entre otros, los siguientes principios: "2) *La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible*"; "4) *Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial*"; "6) *La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al*

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

*principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente".*

Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión ambiental y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía de los seres humanos con la naturaleza y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que los numerales 1, 2, 19, 23 y 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 establecen como funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: "1. *Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente*; 2. *Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural*"; "19. (...) *velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica*"; "23. *Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo* (...)"; y "24. *Regular (...) las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales*"; "40) **Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonía Colombiana y el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de preservar estos ecosistemas**".

Que a través de la Ley 164 de 1994 se aprobó en el ordenamiento jurídico interno la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992, cuyo artículo tercero establece los principios que guían el objetivo y la aplicación del tratado internacional, expresando que es deber de las partes "proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras" (numeral 1º) y "tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible" (numeral 3º).

Que la Ley 165 de 1994 "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la diversidad biológica', hecho en Río de Janeiro el 6 de junio de 1992", establece en su artículo 8, literales a, b, d, e y j, las siguientes obligaciones de conservación in situ para el Estado colombiano: "a) *Establecerá un sistema de áreas*

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

*protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica"; "d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas"; j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente".*

Que el artículo 8° del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus literales a, b, d, e y j establece las siguientes obligaciones de conservación in situ para el Estado colombiano: "a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica"; "d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas"; j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente".

Que la Ley 685 de 2001, por el cual se expide el Código de Minas, dispuso en su artículo 34 como zonas excluibles de minería las zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente. Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en dichas zonas, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras.

Que mediante la Ley 1844 de 2017 se aprobó el Acuerdo de París, adoptado en la COP21, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto de niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. Dicho acuerdo reconoce el papel esencial de los bosques y sumideros naturales en la consecución de esta meta global de mitigación, alentando a los países a conservar y aumentar dichos sumideros.

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

Que las metas nacionales de mitigación de gases efecto invernadero (GEI) y de adaptación al cambio climático a 2030, así como las acciones mínimas para lograrlo, comprenden las establecidas en la mencionada ley y en las "Actualizaciones de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC)" sometidas ante la CMNUCC, o cualquiera que lo actualice o sustituya.

Que en procura de la transición hacia la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono, el sector ambiente fortalece su contribución climática para la NDC 3.0 alrededor de cuatro ejes estratégicos, dos de los cuales apuntan directamente a la protección del bioma amazónico: el Eje 1, de Protección integral y restauración del Bioma Amazónico para la estabilidad climática, hídrica y de biodiversidad, que impulsa la conservación de su integridad ecológica, la conectividad Andes–Amazonía y la reducción del riesgo de alcanzar umbrales críticos de degradación ecosistémica, al tiempo que promueve la transición hacia economías forestales, de la biodiversidad y de base comunitaria, con la participación de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, comunidades locales y campesinado; y el Eje 2 de Reducción de la deforestación y restauración de los bosques, cuya meta es disminuir la tasa de deforestación a 50,000 ha/año en 2030.

Que el 22 de diciembre de 2021 se profirió la Ley 2169 de 2021, que tiene por objeto establecer metas y medidas mínimas para alcanzar la carbono neutralidad, la resiliencia climática y el desarrollo bajo en carbono en el país en el corto, mediano y largo plazo, en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República de Colombia sobre la materia, fijando como meta a 2025 la carbono neutralidad.

Que la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", establece como primer eje de transformación el *Ordenamiento del territorio alrededor del agua*, el cual busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales.

Que la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 5 de abril de 2018 (Rad. STC4360-2018), reconoció a la Amazonía Colombiana como entidad "sujeto de derechos", titular de la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración a cargo del Estado.

Que la Corte Suprema de Justicia encuentra aplicable a la situación ambiental de la Amazonía los principios ambientales de precaución, equidad intergeneracional y solidaridad; el primero de ellos, habida cuenta del peligro de daño que existe por la relación entre la deforestación de la selva amazónica con el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), que generaría un incremento de la temperatura en Colombia y el riesgo de ruptura de la conectividad ecosistémica con los Andes, causando la probable extinción o amenaza de la subsistencia de las especies habitantes de este corredor ecológico.

Que en aplicación del principio de solidaridad, la Corte Suprema de Justicia señaló que es deber y corresponsabilidad del Estado colombiano detener las causas que provocan la emisión de GEI ante la abrupta reducción boscosa de la



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Amazonía, *“siendo imperante adoptar medidas de mitigación inmediatas, protegiendo el derecho al bienestar ambiental, tanto a los tutelantes, como a las demás personas que habitan y comparten el territorio amazónico, no sólo el nacional, sino el extranjero, junto con todos los pobladores del globo terráqueo, incluido, los ecosistemas y seres vivos”*. En igual sentido, señaló que corresponde a las autoridades *“responder eficazmente a los cuestionamientos propios de la problemática advertida, entre los cuales, conviene destacar la imperiosa necesidad de adoptar medidas correctivas y paliativas para (...) iv) la falta de prevención de las consecuencias inherentes a la apertura de vías, al otorgamiento de títulos de propiedad territorial y de concesión minera; (...) vi) la preservación de ese ecosistema por su importancia para regular el clima mundial (...)”*.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia T-622 de 2016 definió el concepto y alcance de los derechos bioculturales, señalando que *“hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente”*.

Que el Consejo de Estado, mediante Sentencia (AP) No. 250002341000-2013-02459-01 del 04 de agosto de 2022, aclarada y adicionada por la providencia del 29 de septiembre del mismo año, concluyó una vulneración sistemática a los derechos colectivos ambientales invocados en razón a la desarticulación institucional entre el sector ambiente y sector minas, un insuficiente ordenamiento territorial y ambiental, y un deficiente control y fiscalización de títulos mineros.

Que, con el fin de atender las problemáticas invocadas, el Consejo de Estado estimó necesario adoptar medidas orientadas a evitar el otorgamiento de títulos mineros en áreas que cuenten con ecosistemas de características especiales que requieran protección y que aún no estén catalogados como áreas de exclusión minera.

Que en consideración de las obligaciones ambientales y de derechos humanos del Estado colombiano fijadas en la Constitución, de los compromisos derivados de tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de protección a la diversidad étnica y cultural, la diversidad biológica y la mitigación al cambio climático, con especial énfasis en la región amazónica (TCA), y de las órdenes judiciales proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en materia de ordenamiento minero y ambiental, protección de áreas de especial importancia ecológica, y de la especial protección de la Amazonía en su calidad de sujeto de derechos, titular de la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, se encuentra pertinente hacer uso de las facultades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible previstas en la Ley 99 de 1993 y en especial de la figura establecida en el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, a efectos de declarar una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico, con carácter definitivo, con el objeto de

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, y de garantizar la salvaguarda de la integridad étnica y cultural de los pueblos amazónicos, así como la protección de este ecosistema estratégico y de sus funciones esenciales para la regulación climática, hídrica y en la captura de carbono continental y planetaria, de conformidad con las siguientes consideraciones técnicas y jurídicas.

## **2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS**

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de sus dependencias técnicas, en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y con base en la información aportada y la articulación realizada con el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, los institutos de investigación del SINA, las autoridades ambientales y las autoridades indígenas, elaboró el “DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA LA DELIMITACIÓN Y DECLARATORIA DE LA ZONA DE RESERVA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DEL BIOMA AMAZÓNICO DE CARÁCTER DEFINITIVO” (versión \_\_, fecha \_\_), el cual será parte integral del presente acto administrativo, y constituye el fundamento objetivo y especializado que permite sustentar la delimitación y declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables del Bioma Amazónico.

El Documento Técnico de Soporte (en adelante DTS) orienta la actividad de la administración, en su componente ambiental, a la declaratoria de una reserva para sustraer de concesión y autorización los recursos naturales renovables del bioma amazónico a efectos de la explotación de minerales e hidrocarburos. El DTS fue construido a partir de la evidencia científica, diagnósticos ambientales y análisis espaciales, y desarrolla un análisis de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos en el bioma amazónico. Lo anterior permitió identificar los principales factores de presión y amenaza que inciden en la pérdida de cobertura boscosa y en la degradación ecosistémica, resaltando el lugar que ocupa el desarrollo minero y de hidrocarburos en la región.

A continuación, se presenta una síntesis del contexto regional del bioma amazónico, sus figuras de ordenamiento territorial y de gobierno propio, su caracterización en términos ambientales y socioeconómicos, y la identificación de presiones y amenazas, en interacción con los escenarios de cambio climático, que se desarrollan a detalle en el DTS. Este contexto y caracterización permite dimensionar la importancia del bioma amazónico para el país y los pueblos originarios, en términos ambientales, culturales y ancestrales. Y advierte un escenario de presiones y amenazas, donde el extractivismo minero y de hidrocarburos figura como amenaza crítica para la transformación negativa de la amazonia.

### **2.1. CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL BIOMA AMAZÓNICO**

La Región Amazónica colombiana, definida por el Instituto SINCHI, es una ecorregión estratégica por su extensión ( $\approx 483.164 \text{ km}^2$ ; 42,3% del territorio continental de Colombia) y por su alto valor biológico, ecológico, cultural, histórico, económico y político.

Su importancia hidrográfica radica en su ubicación en el noroccidente de la cuenca amazónica: aporta cabeceras y afluentes mayores de los ríos Amazonas (Putumayo, Caquetá, Apaporis, Vaupés, Guainía) y Orinoco (Inírida, Guaviare,

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Vichada y tramo del Orinoco); la cuenca amazónica alberga ~1.100 ríos, la red fluvial continental más extensa del planeta.

El límite regional, trazado por el SINCHI, integra criterios hidrográficos, biogeográficos y político-administrativos, abarcando desde la desembocadura del Vichada en el Orinoco y siguiendo divisorias de aguas andino-amazónicas hasta las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.

En términos administrativos, comprende totalmente Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y parcialmente Meta, Vichada, Cauca y Nariño; incluye 61 municipios (43 completos y 18 parciales) y 18 territorios indígenas en proceso de formalización como Entidades Territoriales Indígenas. 8 territorios indígenas ya formalizados como entes territoriales y 10 territorios indígenas en proceso de formalización. **(Pendiente actualizar con declaración reciente de 8 Territorios Indígenas como entes territoriales)**

De la superficie regional, 22,9% pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 6,7% de esta se superpone con resguardos indígenas. En total, los resguardos cubren 26,8 millones de ha (~55% de la región), destacando el papel central de los pueblos indígenas en la conservación y gobernanza del territorio.

### **En relación con el Medio Abiótico**

#### **Clima y atmósfera**

- Régimen térmico estable ( $\approx 24\text{--}27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) y muy alta precipitación multianual ( $\sim 3.200\text{ mm/año}$ ) con patrón monomodal: base de alta productividad biológica y regulación hidrológica.
- Vientos débiles ( $<1\text{ m/s}$  a baja altura); la ZCIT y los alisios gobiernan convección y nubosidad.
- La cobertura boscosa modula el microclima: menos bosque  $\Rightarrow$  más temperatura, mayor variabilidad de humedad y estrés hídrico local.

#### **Reciclaje de humedad y circulación regional**

- El bosque recicla  $\sim 50\%$  de la lluvia vía evapotranspiración, estabiliza la temperatura superficial y refuerza la circulación regional.
- La cuenca amazónica exporta vapor hacia los Andes (“ríos voladores”); la orografía induce lluvias que alimentan macrocuencas andino-amazónicas, mientras los Andes retro-modulan la convección amazónica.

#### **Carbono y química atmosférica**

- Sumidero neto de carbono (biomasa y suelos) con señales de debilitamiento: conservar bosque maduro y suelos orgánicos es clave de mitigación.
- Emisión natural de BVOC (isopreno, monoterpenos, sesquiterpenos) que forman aerosoles biogénicos y núcleos de condensación: favorecen nubes y precipitación; procesos no contaminantes y ecosistémicos.

#### **Hidrología superficial**



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

- Alta oferta hídrica nacional concentrada en el bioma y fuertes índices de regulación (cuenca Amazonas): rol estratégico para la seguridad hídrica del país.
- La deforestación degrada el régimen hidrológico y la calidad del agua (más sedimentos, cambios de escorrentía y pulsos de caudal).

#### Geología y aguas subterráneas

- Predominio de unidades lito-estratigráficas permeables (aluviales y terciarias) con acuíferos relevantes (p. ej., Leticia–Tabatinga, valles y terrazas); su recarga depende de la lluvia y la integridad del bosque.
- Uso creciente de agua subterránea (aljibes/pozos), generalmente apta; existen focos con metales, fenoles y microbiología que requieren monitoreo, trazabilidad y control de presiones difusas (minería ilegal, vertimientos, cultivos ilícitos).

#### Calidad del aire

- En general buena por baja presión industrial; episodios locales de PM por vías sin pavimentar, movilidad y operaciones petroleras: gestionar con riego de vías, control de velocidades y buenas prácticas.

#### Conexión Andes–Amazonia (evidencia isotópica)

- Interdependencia ecológica demostrada entre Amazonía y ecosistemas altoandinos (páramos): la recarga hídrica depende de la humedad amazónica transportada.
- En temporadas lluviosas, la humedad amazónica puede aportar 50–90 % de la recarga en sistemas como Chingaza: demanda protección reforzada de corredores atmosféricos y biogeográficos.

#### Servicios ecosistémicos críticos y no sustituibles

- BVOC y aerosoles biológicos del bosque actúan como núcleos de condensación que favorecen lluvias: no sustituibles en el corto/mediano plazo por medios artificiales.
- El bioma funciona como regulador hídrico-climático continental vía “ríos voladores”: su integridad es de interés público y estratégico nacional y regional.

### **En relación con el Medio Biótico**

#### Biogeografía y origen de la diversidad

La Amazonía colombiana, núcleo del Neotrópico, concentra una diversidad excepcional forjada por una historia evolutiva antigua (Cretácico–Cenozoico), pulsos climáticos pleistocenos y barreras fluviales que impulsaron especiación y endemismo.

- Se reconocen nueve áreas de alto endemismo (p. ej., Chiribiquete–Apaporis, Alto Putumayo, Macarena–Caguán), que funcionan como núcleos de conservación y referencia para la planificación territorial.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

#### Dinámica de coberturas y deforestación

- Los bosques siguen siendo la cobertura dominante (~82%), pero presentan pérdida neta reciente y conversión hacia pastos (↑ ~261 mil ha 2022–2024), confirmando la sabanización/ganaderización del paisaje.
- Entre 2016–2023: la Amazonía perdió ~788 mil ha de bosque (~60% del total nacional), con picos tras el Acuerdo de Paz; Tinigua y Sierra de La Macarena figuran entre los PNN más afectados.
- La deforestación fragmenta hábitats, reduce conectividad y deteriora funciones de regulación hídrica y climática, con impactos socioecológicos sobre comunidades locales e indígenas.

#### Flora: riqueza, endemismo y amenaza

- Se registran 16.541 especies de plantas en el bioma; familias más ricas: Fabaceae, Rubiaceae, Orchidaceae, Asteraceae, Melastomataceae.
- Endemismo destacado (~280 spp.), con focos como Chiribiquete–Apaporis.
- 119 especies amenazadas (24 CR, 51 EN, 44 VU): presión por pérdida y degradación de hábitat y aprovechamiento selectivo de maderas finas.

#### Fauna: magnitud y estado

- Inventario actual: 6.206 artrópodos y 3.281 vertebrados (~1.104 peces, 269 herpetos, 1.500 aves, 265 mamíferos).
- Artropofauna: hiperdensa y submuestreada; rol clave en control biológico y ciclado de nutrientes.
- Ictiofauna: la Amazonía colombiana alberga ~68% de los peces dulceacuícolas del país; la diversidad funcional depende de tipos de agua (blancas, negras, claras) y del pulso de inundación que conecta río–bosque (dispersión de semillas por peces).
- Herpetofauna: alta riqueza con especies no descritas; anfibios sensibles a pérdida de hábitat.
- Avifauna: ≥800 spp. registradas (potencial 1.300–1.500); presencia de endémicas (p. ej., *Chlorostilbon olivaresi*) y migratorias
- Mastofauna: 265 spp.; especies sombrilla y clave (jaguar, danta, nutrias, delfín rosado) con amenazas por caza y pérdida de hábitat; alta concentración de primates en Putumayo, Caquetá y Amazonas.

#### Conectividad ecológica

- La Amazonía es nodo continental que articula Andes–Orinoquia–Atlántico; la función de conectividad está comprometida por el arco de deforestación.
- Corredores priorizados (SINCHI, Jaguar, enfoque avifauna entre PNN) identifican franjas críticas en la transición Andes–Amazonía; su protección es condición para la resiliencia ante cambio climático.

#### En relación con lo social y económico

- La Amazonía alberga 1,28 millones de habitantes (2,6% del total nacional), con predominio rural (52,37%). La distribución es heterogénea:

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada presentan baja densidad y dispersión poblacional, mientras Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta concentran mayor población vinculada a colonización y frontera agropecuaria. Cauca y Nariño, como zonas de transición, tienen las densidades más altas.

- Alta heterogeneidad territorial: densidades muy bajas en Amazonas–Guainía–Vaupés–Vichada favorecen conservación, pero encarecen la infraestructura; el piedemonte (Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta) concentra población y presión antrópica.
- Gobernanza étnica es estructural, no marginal: 231 resguardos ( $\approx 27$  Mha) y 64 pueblos indígenas más 32 consejos comunitarios configuran la base de ordenamiento; cualquier figura de reserva debe reconocer autoridad propia y sistemas de uso tradicional.
- La diversidad cultural y el pluralismo en el ejercicio de gobierno es estructural, no marginal: 231 resguardos ( $\approx 27$  Mha), 32 Consejos Comunitarios y 20 Territorios Indígenas en proceso de consolidación como entidades territoriales de carácter especial, en el marco del Decreto Ley 488 de 2025, configuran la base de ordenamiento político administrativo. Cualquier figura ambiental debe reconocer los principios de autonomía y libre determinación que enmarcan el gobierno propio en sus territorios, como fundamento de la gestión territorial.

### **Sobre el rol de los pueblos indígenas en el cuidado y protección del bioma amazónico**

- Los pueblos indígenas son dueños ancestrales de los territorios amazónicos, custodios de la biodiversidad y de los bosques de la amazonia, y a través de sus sistemas de conocimiento y gobierno propio han protegido el bioma amazónico, siendo los territorios indígenas los mejores conservados de la región.
- Los pueblos indígenas de la amazonia son aliados estratégicos y necesarios para la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático en el bioma amazónico, quienes revisten una capacidad única para gestionar y manejar los recursos naturales y el ambiente de manera sostenible, a través de su espiritualidad y conocimientos ancestrales.
- En el bioma amazónico hacen presencia Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y sus territorios, que gozan de una especial protección por parte del Estado sobre la base de los principios de autodeterminación y no contacto, intangibilidad territorial, precaución, interdependencia territorial, corresponsabilidad y participación.
- A la fecha existen 25 territorios en proceso de formalización como Entidades Territoriales Indígenas en el bioma amazónico, los cuales mantienen el 99,5% de sus coberturas naturales intactas y sus bosques representan el 41% del total de los existentes en la región al 2023. Estos territorios son gobernados de acuerdo a los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, expresados en sus Consejos Indígenas, y según su ley de origen y Planes de Vida.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

### **Sobre el rol de las comunidades afroamazónicas y campesinas en la protección del Bioma Amazónico**

- Que la población afroamazónica y el campesinado han desempeñado un papel decisivo en la protección de los bosques y las aguas, mediante prácticas agroalimentarias diversificadas, medicina tradicional, autogobierno comunitario y la constitución de Zonas de Reserva Campesina, consolidándose como actores fundamentales de la gestión sostenible del territorio.
- El “Anillo de Poblamiento” creció ~36% (2002–2020) y hoy articula colonización, apertura vial y conversión de bosque en usos agropecuarios; es el principal corredor de transformación del bioma.
- Modelo extractivista y de frontera: la matriz productiva está poco diversificada y anclada a agropecuaria extensiva, hidrocarburos y minería, con desalineación frente a la vocación del suelo y altos costos ecosistémicos.
- Estructura económica frágil: la manufactura y servicios profesionales  $\leq 3\%$  del PIB departamental; en planicie amazónica la agricultura pesa de 21% a 39%, evidenciando dependencia de actividades primarias y baja inserción en cadenas de valor.
- Servicios públicos y derechos sociales en déficit crítico: pobreza multidimensional  $\approx 60\%$  (vs 19% nacional), NBI  $> 50\%$  en la mayoría de municipios y conectividad digital  $< 10\%$ ; esto eleva vulnerabilidad y limita transición productiva.
- Brechas urbano–rurales y periurbanas: expansión no planificada ocupa riberas y humedales, debilita servicios ecosistémicos urbanos (agua, microclima) y aumenta riesgo climático.
- Economías ilícitas e informalidad: la presión de coca, minería y tala ilegales y la alta informalidad laboral distorsionan mercados, capturan rentas locales y agravan conflictividad socioecológica.
- Conocimiento y prácticas tradicionales son activos de control de riesgo: chagras, manejo hidrobiológico, rotación y cosmovisiones sostienen biodiversidad y seguridad alimentaria y deben incorporarse como medidas de manejo.

### **Sobre Presiones y Amenazas en el Bioma Amazónico Colombiano**

- **Extractivismo minero y de hidrocarburos como amenazas críticas.** Las actividades extractivas de minería e hidrocarburos no solo generan impactos directos e inmediatos, sino que también operan como motores estructurales de transformación negativa del bioma amazónico,
- **Deforestación como fenómeno multicausal y acumulativo** La deforestación en la Amazonía colombiana no responde a un único factor, sino a la convergencia de actividades agroindustriales, ganaderas, viales, extractivas y criminales. Esta combinación configura un entramado complejo que degrada ecosistemas, fragmenta la conectividad ecológica y reduce drásticamente la resiliencia del bioma frente al cambio climático.
- **Expansión agropecuaria y praderización como motores centrales** La agroindustria de palma de aceite y la ganadería extensiva se han consolidado como ejes estructurales de la pérdida de bosque, incluso dentro de resguardos indígenas y áreas protegidas. Estas prácticas no

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

solo transforman la cobertura, sino que generan inequidades territoriales, ausencia de trazabilidad y normalización de prácticas ilegales como el blanqueo de ganado.

- **Infraestructura vial como catalizador de impactos indirectos**

La apertura descontrolada de más de 16.000 km de vías desde 2018 reproduce el efecto de “espina de pescado”, donde las carreteras principales inducen la proliferación de vías secundarias y terciarias. Esto facilita la colonización, la expansión de cultivos ilícitos y la extracción ilegal de recursos, multiplicando los impactos más allá del alcance de los proyectos inicialmente licenciados.

- **Economías ilícitas y conflictividad armada como factores de persistencia**

La extracción ilegal de madera, los cultivos ilícitos y el control territorial de grupos armados consolidan un escenario de violencia, ilegalidad y deterioro socioambiental. Estas dinámicas se retroalimentan con la debilidad institucional y la ausencia de alternativas económicas sostenibles, generando un círculo vicioso de degradación ambiental y vulneración de derechos humanos.

- **Cambio climático como amplificador sistémico**

Las proyecciones al 2100 anticipan un escenario extremo de mayor humedad y temperaturas críticas (+3 a +5 °C), que supera los umbrales de tolerancia de especies y pone en riesgo los “ríos voladores” y la estabilidad hídrica continental. El cambio climático no solo es consecuencia de la deforestación, sino también un factor que intensifica las presiones locales y globales, multiplicando los riesgos para la biodiversidad y la seguridad de las comunidades.

- **Impactos acumulativos y pérdida de servicios ecosistémicos**

El análisis de redes de causalidad evidencia que la degradación del agua superficial y subterránea, junto con la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, son los nodos centrales del deterioro amazónico. Estos impactos desencadenan efectos en cascada sobre el suelo, el paisaje y las dinámicas socioeconómicas, comprometiendo la provisión de servicios ecosistémicos esenciales como la regulación climática, la conectividad ecológica y la seguridad hídrica y alimentaria.

Con base en el contexto y caracterización precedente, el DTS efectuó un análisis técnico sobre los impactos ambientales y los impactos acumulativos de la minería y los hidrocarburos en el bioma amazónico.

A continuación, se presentan las conclusiones técnicas y científicas alcanzadas en cuanto a los impactos de dichas actividades extractivas, las cuales fueron organizadas en función del nivel de certeza científica sobre los hallazgos. Aquellos sobre los que existe un conocimiento basado en evidencia cierta, se enmarcan en la aplicación del principio de prevención ambiental, mientras que los hallazgos que se fundamentan en modelaciones científicas que comportan un principio de certeza científica razonable, se encuadran en el principio de precaución, como se desarrollará posteriormente.

## **2.2. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO TÉCNICO**



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

(Pendiente actualizar con nueva versión de DTS)

"12.1. En el marco del Principio de Prevención

### **Sobre los impactos acumulativos**

- *La confluencia de proyectos extractivos, la expansión agropecuaria y las economías ilegales ha convertido la deforestación amazónica en un fenómeno multicausal que supera la capacidad de control de los instrumentos regulatorios vigentes. En departamentos críticos como Putumayo y Caquetá, la apertura de infraestructura vinculada a hidrocarburos y minería actúa como catalizador de presiones indirectas — colonización, tala, cultivos ilícitos e incendios— que intensifican la pérdida de bosque y comprometen la conectividad ecológica. Este patrón, reforzado por el denominado “efecto espina de pescado” asociado a la expansión vial, consolida un escenario de alta vulnerabilidad ambiental y biogeográfica que amenaza de manera estructural la integridad del Bioma Amazónico colombiano.*
- *A partir del análisis de imágenes satelitales, se ha confirmado que los proyectos de hidrocarburos realizan aprovechamientos forestales y actividades de manejo de vías, frente a los cuales resultan procedentes medidas de compensación y mitigación sujetas a seguimiento por parte de la autoridad ambiental. No obstante, la habilitación de vías secundarias y terciarias al interior del bioma favorece la extracción ilegal de madera y estimula la expansión de la frontera de deforestación más allá de las áreas autorizadas, generando impactos ambientales negativos de difícil control.*
- *El análisis de Modelación de Sistemas Complejos (MSC) evidencia que las actividades extractivas en curso y las prospectivas de minería e hidrocarburos en el bioma amazónico configuran un entramado de impactos acumulativos que afectan de manera directa el agua superficial y subterránea, al reducir su disponibilidad y calidad; los ecosistemas terrestres, al fragmentar hábitats y disminuir la resiliencia ecológica; y el suelo, al acelerar procesos de degradación y pérdida de funcionalidad. Estas alteraciones, al interactuar entre sí, generan efectos en cascada que alcanzan el medio socioeconómico, con riesgos de cambios en los usos del suelo, tensiones territoriales y conflictos socioambientales.*
- *La modelación de redes muestra que dichos impactos no ocurren de forma aislada, sino que pueden reforzarse y amplificarse con la incidencia del cambio climático, el cual incrementa la variabilidad en la disponibilidad hídrica, intensifica eventos extremos y reduce la capacidad de amortiguación de los ecosistemas frente a presiones extractivas. Esta interacción transforma impactos locales en procesos de degradación de mayor escala, con consecuencias sobre la seguridad hídrica, alimentaria y la gobernanza territorial. Ante este escenario, la declaratoria del bioma amazónico como zona de reserva se plantea como una medida preventiva orientada a limitar la expansión extractiva, reducir riesgos acumulativos y fortalecer la capacidad adaptativa frente al cambio climático.*

### **Sobre la biodiversidad y la conectividad ecológica**

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

- *La fauna de la Amazonía colombiana enfrenta un riesgo creciente de pérdida de biodiversidad como resultado de la deforestación y la degradación de hábitats, lo que ya evidencia disminución en los tamaños poblacionales de numerosas especies. La fragmentación y pérdida acelerada de cobertura forestal comprometen la conectividad ecológica y afectan tanto a especies endémicas como migratorias, alterando interacciones tróficas y servicios ecosistémicos esenciales. Este riesgo se intensifica con el avance de la frontera de deforestación, amenazando la riqueza taxonómica y funcional de múltiples grupos biológicos, así como la seguridad alimentaria y medios de vida de comunidades locales. La evidencia científica confirma que la presión antrópica incrementará la pérdida de biodiversidad y pondrá en riesgo procesos ecológicos y evolutivos no solo para el bioma sino para la fauna y flora Neotropical y sus efectos en cadena, por lo cual se requieren medidas urgentes que eviten impactos irreversibles en la biodiversidad y el bienestar socioambiental.*

### **Sobre el papel regulador del bioma en el clima regional y global**

- *El Bioma Amazónico se caracteriza por su baja variabilidad térmica (24–27 °C en promedio multianual), un régimen de lluvias unimodal influenciado por latitud, distancia al mar y orografía, velocidades medias de viento bajas y alta humedad relativa (75–85 %). Estas condiciones lo convierten en un regulador climático que estabiliza las dinámicas regionales, según registros climatológicos históricos. Sin embargo, el cambio climático y las presiones antrópicas podrían transformar este ecosistema de selva húmeda tropical hacia escenarios de sabana tropical, deteriorando sus servicios ambientales.*
- *La interacción constante entre atmósfera y océanos confirma la relevancia regional del bioma amazónico, pues la evaporación generada en esta zona se extiende hacia países como Argentina, Paraguay y Brasil, evidenciando su importancia ecosistémica continental. Adicionalmente, se ha validado que la interacción de los vientos del Este con los Andes tropicales transporta vapor de agua hacia las zonas más pobladas de Colombia, particularmente en temporada de junio a agosto, resaltando la necesidad de conservar el bioma como proveedor de agua y mitigador de contaminación atmosférica, dado que también se movilizan contaminantes de incendios forestales que pueden afectar la calidad del aire en ciudades como Bogotá.*

### **Sobre la degradación ecológica y los servicios ecosistémicos**

- *La Amazonía colombiana enfrenta un proceso sostenido de degradación ecológica, asociado a deforestación, expansión extractiva y fragmentación del paisaje, comprometiendo conectividad, resiliencia y provisión de bienes y servicios esenciales para las comunidades. La evidencia científica advierte riesgos de pérdida irreversible de biodiversidad y deterioro de servicios ecosistémicos vitales, como provisión de alimentos, regulación hídrica y protección frente a eventos climáticos extremos. La declaratoria de la reserva actúa como medida preventiva para preservar la integridad ecológica y asegurar la continuidad de dichos servicios.*

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

### ***Sobre los impactos a pueblos indígenas y comunidades locales***

- *Las comunidades amazónicas dependen de la biodiversidad y del manejo sostenible de recursos naturales para actividades productivas tradicionales como pesca, agricultura, recolección y artesanías. La presión de actividades extractivas y cambios en el uso del suelo ha reducido la disponibilidad y calidad de estos recursos, afectando la seguridad alimentaria, la economía local y la transmisión de saberes tradicionales.*
- *Las comunidades presentan altos niveles de pobreza multidimensional, limitada presencia institucional y exposición a dinámicas de conflicto y economías ilegales, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a riesgos ambientales y sociales, generando riesgos de desplazamiento, pérdida de cohesión comunitaria y deterioro progresivo de condiciones de vida.*
- *Se evidencia una transformación acelerada de los modos de vida tradicionales, con pérdida de conocimientos ancestrales y debilitamiento de la organización social, afectando la identidad cultural y la transmisión intergeneracional de saberes. Bajo el principio de prevención, la declaratoria de reserva se configura como instrumento para detener estas transformaciones, garantizar derechos humanos, fortalecer gobernanza y resiliencia comunitaria, y asegurar la continuidad de modelos de vida compatibles con la conservación de los ecosistemas.*

#### ***12.2. En el marco del Principio de Precaución***

### ***Sobre el riesgo de debilitamiento de los ríos voladores***

- *Estudios realizados por distintos autores y por institutos de investigación del Ministerio de Ambiente señalan que hasta un 50 % de la humedad que alimenta la precipitación en la cordillera oriental y en páramos como Chingaza —clave para el suministro de agua del país— podría verse comprometida por amenazas como la deforestación o el cambio climático.*
- *Durante el Fenómeno del Niño 2023–2024, la humedad proveniente del Bioma Amazónico colombiano probablemente contribuyó a la recuperación de embalses estratégicos como Chivor, Guavio y Chuza. La pérdida de esta fuente hídrica agravaría futuros episodios de déficit, intensificando los conflictos por el uso del agua como recurso vital y energético.*

### ***Sobre la función del Bioma Amazónico en la captura y almacenamiento de carbono***

- *La Amazonía almacena aproximadamente 3,43 gigatoneladas de carbono en biomasa aérea, siendo uno de los sumideros más relevantes del planeta. No obstante, la deforestación, los incendios y el cambio climático amenazan con convertirla en una fuente neta de carbono, lo que comprometería el cumplimiento del Acuerdo de París y afectaría la biodiversidad, el suministro de agua y la estabilidad climática global.*

### ***Sobre la conectividad ecológica y la resiliencia climática***

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

- *La conectividad del Bioma Amazónico constituye un eje estratégico para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La deforestación asociada a actividades agropecuarias, mineras, ilícitas y de infraestructura fragmenta los hábitats, interrumpe flujos genéticos y ecológicos, y debilita la capacidad adaptativa de especies.*
- *La zona del arco de deforestación, en la transición Andes–Amazonía, es crítica para la resiliencia frente al cambio climático. Su pérdida compromete la funcionalidad ecológica, la dispersión de especies y la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. En este contexto, la conservación de la conectividad Andes–Amazonía no es solo un asunto de biodiversidad, sino también de estabilidad climática e hídrica regional.*

### **Sobre el cambio climático**

- *Los análisis de amenazas y vulnerabilidad evidencian un incremento proyectado de precipitación (40–50 % en zonas de piedemonte y cordillera) y aumentos de temperatura de +3 a +5 °C, generando riesgos de desabastecimiento hídrico, deterioro de calidad de agua y pérdida de biodiversidad.*
- *Ante la magnitud de dichos impactos y la incertidumbre sobre su materialización, el principio de precaución justifica la declaratoria de reserva del Bioma Amazónico, al proteger coberturas boscosas, mitigar eventos extremos y resguardar servicios ecosistémicos claves. Esta medida se alinea, además, con compromisos internacionales como la NDC, los ODS 13 y 15, y la Meta 30x30.*

### **Sobre el riesgo del Tipping Point amazónico**

- *La evidencia científica señala la posibilidad de alcanzar un umbral crítico o “Tipping Point”, a partir del cual la selva pierde su capacidad de autorregeneración y se transforma en un ecosistema degradado. Dada la irreversibilidad de sus posibles efectos —pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico y liberación masiva de carbono— resulta imperativo aplicar medidas preventivas inmediatas bajo el principio de precaución.*

### **Sobre la gobernanza territorial y los derechos fundamentales**

- *La falta de mecanismos efectivos de gobernanza incrementa los conflictos socioambientales y la explotación insostenible de recursos. La creación de una reserva de recursos naturales fortalece la institucionalidad y la coordinación interinstitucional, previniendo impactos graves o irreversibles.*
- *Los cambios en los ecosistemas amazónicos amenazan derechos humanos esenciales como el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la salud y un ambiente sano. En consecuencia, la declaratoria de reserva, amparada en el principio de precaución, constituye una acción proporcional y necesaria para proteger estos derechos frente a riesgos de gran magnitud.”*

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

El insumo técnico-científico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible identifica la existencia confluente de proyectos extractivos, expansión agropecuaria y economías ilegales que ha convertido la deforestación amazónica en un fenómeno que supera la capacidad de control de los instrumentos regulatorios. Existe evidencia comprobada sobre la incidencia de la apertura de infraestructura vinculada a los hidrocarburos y la minería como catalizador de presiones indirectas sobre el ambiente, como la extracción ilegal de madera, la colonización, los cultivos de uso ilícito y los incendios, que amenaza de manera estructural la integridad del bioma amazónico.

Igualmente, se evidencia que las actividades de minería e hidrocarburos en curso, sumadas a las proyectadas, generan impactos acumulativos que afectan directamente la disponibilidad y calidad del agua, disminuyen la resiliencia ecológica, aceleran procesos de degradación y pérdida de funcionalidad ecológica, entre otros. Los riesgos identificados pueden reforzarse y amplificarse con la incidencia del cambio climático, que intensifica eventos extremos, reduce la capacidad de amortiguación y transforma impactos locales en procesos de mayor escala.

En consecuencia, los hallazgos científicos orientan la adopción de una medida preventiva que limite la expansión extractiva, reduzca los riesgos acumulativos y fortalezca la capacidad adaptativa frente al cambio climático. De lo contrario, se impactarían servicios ecosistémicos esenciales sobre los que ya existe evidencia de su degradación acelerada en la amazonia, como la pérdida de biodiversidad y la regulación climática. Y se generaría una amenaza sobre fenómenos sistémicos como los ríos voladores, que aseguran el suministro de agua para la capital del país; la transformación de la amazonia de sumidero a fuente neta de carbono; y el arribar a un umbral crítico o “Tipping point”, de colapso ecosistémico del bioma.

**Faltaría una conclusión sobre afectación a los pueblos y comunidades.**

El proceso de investigación científica, sobre el cual se debe orientar la política ambiental del país (L.99/93, art. 1º), determina la activación de la función preventiva del Estado, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la declaración de una reserva de recursos naturales renovables de carácter definitivo en el bioma amazónico, en su calidad de patrimonio ambiental estratégico de la Nación y territorio ancestral de los pueblos étnicos. La fundamentación jurídica de la medida, su finalidad y alcance, se entran a desarrollar, de conformidad con el marco jurídico aplicable y el principio estricto de legalidad.

### **3. FUNCIÓN PREVENTIVA DEL ESTADO**

El artículo 80 de la Constitución Política establece una función preventiva del Estado en materia ambiental, al imponerle la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, y el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703 de 2010, haciendo alusión al artículo 80 superior, describe esa labor preventiva, que se manifiesta -entre otros- a través de los principios de prevención y precaución, así:



"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

*"En el apartado anterior se hizo especial mención del artículo 80 de la Constitución que encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. La primera parte de la disposición citada constituye el **fundamento de una labor preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente**, para cuya protección se le otorga una singular importancia a la **evitación de la vulneración o del daño** que pueda llegar a presentarse, dado que buena parte de las causas de perturbación, de concretarse, tendrían impactos irreversibles y, en caso de resultar posible la reversibilidad de los efectos, las medidas de corrección suelen implicar costos muy elevados.*

*"En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se **destacan los de prevención y precaución**" (resaltado propio)*

En ese contexto, la caracterización técnica realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da cuenta del altísimo valor ecológico, ambiental, cultural y ancestral del bioma amazónico.

Esta unidad biogeográfica alberga la red fluvial continental más extensa del planeta y cumple un rol estratégico para la seguridad hídrica del país (ríos voladores). Adicionalmente, es uno de los principales sumideros de carbono del planeta (contiene el cambio climático), posee una biodiversidad única con nueve áreas de alto endemismo, y tiene una función en la conectividad ecológica continental.

En forma complementaria, se tiene que el 55% del territorio del bioma se encuentra amparado en resguardos indígenas, lo que demuestra el protagonismo de los pueblos indígenas en la ordenación territorial y su rol en la protección ambiental. Los pueblos indígenas son custodios de la biodiversidad de la amazonia, predicándose una relación de interdependencia. Los atributos ambientales de la amazonia dependen de los sistemas de conocimiento y la espiritualidad indígena, así como los pueblos indígenas dependen de la preservación de la diversidad biológica, porque constituye la fuente de sus medios de vida y de su identidad cultural. Esta es la base de los derechos bioculturales.

De igual forma, en el bioma hacen presencia 36 consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas, lo que permite apreciar una territorialidad de comunidades negras en las cuencas del bioma amazónico, con usos colectivos y prácticas tradicionales, y un rol en la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables.

Así, el bioma se configura como un área de especial importancia ecológica para el país, en los términos de los artículos 8 y 79 de la Constitución Política, intrínsecamente relacionada con la preservación de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y el Estado pluralista, reconocidas en los artículos 1 y 7 superiores. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia (Rad. STC4360-2018) reconoció a la amazonia colombiana como entidad "sujeto de derechos", titular de la protección, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales.

Es pertinente resaltar también, que el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, erigió a la preservación de la amazonia colombiana, en conjunto con el chocó

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

biogeográfico, como de **interés nacional**, facultando expresamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a fijar con carácter prioritario su política ambiental.

Asimismo, los hallazgos del Documento Técnico de Soporte (DTS) concluyen la existencia de un **riesgo crítico** sobre el bioma amazónico. Este riesgo se inscribe en un escenario de poli crisis. Una crisis a nivel regional, del complejo ecosistémico, por la expansión precipitada de la frontera de deforestación. A pesar de la reducción de los índices de deforestación en los años recientes, la deforestación en el arco amazónico sigue siendo una de las principales problemáticas ambientales en Colombia. Entre 2016 y 2023 la amazonia perdió 788 mil hectáreas de bosque, lo que representa el 60% de toda la deforestación a nivel nacional. Sólo entre 2022 y 2024 se perdieron 261 mil hectáreas de bosque. La deforestación implica un proceso sostenido de degradación ecológica y fragmentación ecológica que compromete la conectividad y resiliencia de los ecosistemas, así como la garantía de derechos de las comunidades.

La otra crisis es planetaria y se conoce como cambio climático. De acuerdo con el DTS, siendo altamente sensible por su rol en el reciclaje de humedad y en la regulación hídrica continental, los cambios proyectados hacia el año 2100 representan un riesgo crítico para el bioma amazónico, en razón a que *“implican aumentos sostenidos de temperatura y alteraciones en los patrones de precipitación que comprometen tanto la biodiversidad como la provisión de servicios ecosistémicos esenciales”* (Minambiente, 2025). La combinación de precipitaciones intensificadas y calor sostenido aumenta la vulnerabilidad de la región frente a fenómenos como inundaciones, incendios, pérdida de hábitats y riesgos para las comunidades locales, acercando al bioma a un posible punto de inflexión ecológico.

En ese contexto de crisis, los hallazgos científicos advierten los riesgos derivados de la ampliación de la frontera extractiva, representada en la concesión y autorización de nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Por un lado, la construcción de infraestructura vial vinculada a estas actividades induce la proliferación no planificada de vías secundarias y terciarias, expandiendo la deforestación hacia áreas contiguas. A partir del análisis de imágenes satelitales, se puede evidenciar cómo la habilitación de vías en proyectos de hidrocarburos favorece la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera de deforestación más allá de las áreas autorizadas, y aún a pesar de las medidas de compensación y mitigación.

Adicionalmente, el análisis de impactos acumulativos de las actividades extractivas en curso, adicionadas al escenario proyectado por las solicitudes vigentes, evidencian afectaciones intolerables para la estabilidad de la amazonia como área de especial importancia ecológica, impactando negativamente en las comunidades locales, generando cambios en los usos del suelo, tensiones territoriales y conflictos socioambientales.

El riesgo identificado sobre este macro ecosistema, de importancia estructural para el país y más allá de las fronteras nacionales, reconocido como “pulmón de la humanidad”, activa la labor preventiva del Estado a fin de impedir la materialización del riesgo y evitar consecuencias catastróficas como la desestabilización climática e hídrica, comprometiendo el suministro de agua para el centro del país, la pérdida de la funcionalidad ecosistémica de captura de carbono (y la posibilidad de convertirse en fuente de carbono), y el sobrepaso de los límites del bioma, generando un cambio abrupto o “tipping point”, en el

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

cual el ecosistema pierde su capacidad de auto regenerarse y se desencadenan procesos de degradación irreversible.

### De la medida a adoptar

En consecuencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en uso de la labor preventiva del Estado, encuentra idóneo, necesario y proporcional la adopción de una medida consistente en la declaración de una reserva de los recursos naturales renovables del bioma amazónico, excluyendo los mismos de concesión y autorización de uso para el desarrollo de nuevas actividades de minería e hidrocarburos. Al tenor del artículo 47 del Código de Recursos Naturales (DL. 2811/74), el objeto de la reserva es adelantar programas de restauración, conservación o preservación de los recursos naturales y del ambiente, sin afectar usos distintos a los ya referidos.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las Reservas de Recursos Naturales Renovables del Decreto Ley 2811 de 1974, la Corte Constitucional, en Sentencia C-649 de 1997, precisó su alcance señalando que *"pueden existir reservas relativas a ciertos recursos naturales vgr. reservas en flora, fauna, agua, etc. o en relación con determinadas áreas del territorio nacional que están destinadas a algunos grupos étnicos o asegurar el manejo integral y la preservación de recursos naturales, mediante la constitución de parques naturales u otras modalidades con idéntico propósito, o a la consecución de una finalidad de interés público o social"*. Igualmente, el Consejo de Estado, en el capítulo II.3.3 de la Sentencia Rad. 250002341000-2013-02459-01, calificó las Reservas de Recursos Naturales del artículo 47 como áreas de conservación in situ de origen legal y zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del ambiente.

La Reserva se declara en virtud de la aplicación concurrente de los principios de prevención y precaución ambiental, de conformidad con los estándares constitucionales y legales establecidos por las altas cortes del país, y a la luz de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de protección de la biodiversidad y del sistema climático frente a las emisiones GEI.

### 3.1. Aplicación del principio de prevención

El principio de prevención ambiental, en el **ámbito internacional**, se encuentra consagrado en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 (Principios 18 y 21) y en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 (Principio 2), que establecen el deber de los Estados de utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente, y de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control **no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional**.

A nivel doméstico, la Corte Constitucional ha establecido que el principio de prevención ambiental persigue que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o minimizar los daños ambientales, y requiere por ello de *"acciones y medidas -regulatorias, administrativas o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave"* (Sentencia T-080 de 2015).

La jurisprudencia constitucional ha indicado que el principio de prevención aplica en aquellos casos en los cuales es posible identificar las consecuencias que una

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

medida puede tener sobre el medio ambiente y, como consecuencia de ello, exige que la autoridad competente adopte estrategias que eviten el acaecimiento del daño. De acuerdo con lo anterior, la prevención tiene dos elementos claves: “(i) el conocimiento previo del riesgo de daño ambiental, y (ii) la implementación anticipada de medidas para mitigar los daños” (Sentencia T-733 de 2017).

El estudio científico adelantado en el DTS y que será parte integral del presente acto administrativo, constituye un esfuerzo del Estado para obtener un conocimiento previo del riesgo de daños ambientales en el bioma amazónico, y sus consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos étnicos y los derechos bioculturales. De esta forma, la administración apela al conocimiento científico para descubrir, evitar y contener las amenazas ecosistémicas derivadas de la ampliación de la frontera extractiva de minerales e hidrocarburos en la amazonia, bajo la operatividad del principio de prevención.

Los riesgos identificados se expresan localmente, a nivel país, pero también rebasan los límites de la jurisdicción nacional, con consecuencias a nivel regional (bioma amazónico en su integralidad), a nivel continental (américas) y a nivel planetario, justificando la aplicación del principio de prevención ambiental desde su dimensión internacional.

Como paradigma de lo anterior, se encuentra la incidencia de la explotación de hidrocarburos y de minería en la interrupción de los “ríos voladores” en el bioma amazónico. El fenómeno hidrológico de los “ríos voladores” se entiende como la dinámica vientos-agua-bosque de la cuenca transfronteriza del Amazonas, que constituye una unidad ecológica determinante para la regulación de clima, el ciclo del agua continental, la movilización de compuestos y aerosoles biológicos y la biodiversidad. Según el Foro Económico Mundial (2024), los 400.000 millones de árboles que se calcula que hay en la Amazonia liberan 20.000 millones de toneladas de agua al aire cada día, ciclo hidrológico del que dependen 670 millones de habitantes en toda América Latina.

De la misma manera, la amazonia ha funcionado histórica y evolutivamente como fuente primaria de biodiversidad de todos los biomas neotropicales, por lo que su degradación, intensificada con la eventual expansión de la frontera extractiva, compromete los procesos evolutivos en el Neotrópico, los ecosistemas de Sudamérica y Centroamérica, así como la persistencia de especies migratorias que garantizan la conectividad ecológica desde los bosques templados de Norteamérica hasta las sabanas tropicales del sur. Por tanto, la alteración de la amazonia puede provocar desequilibrios en otras regiones, limitando la conectividad entre ecosistemas y comprometiendo la resiliencia de la biodiversidad a nivel continental, amenazando de paso la estabilidad de cadenas tróficas que sostienen los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de los pueblos y comunidades que habitan este territorio.

Finalmente, el DTS advierte que la selva amazónica, tradicionalmente uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, muestra señales de debilitamiento, con riesgo de convertirse en una fuente neta de CO<sub>2</sub>. Tal cambio tendría implicaciones planetarias drásticas, al acelerar el calentamiento global y generar retroalimentaciones negativas en la regulación térmica y pluvial de todo el sistema terrestre.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Sobre la importancia ecosistémica de la amazonía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, refirió que la Amazonía, con una extensión de aproximadamente 6,4 millones de km<sup>2</sup> *“es la mayor cuenca fluvial y la zona de mayor diversidad biológica del planeta, así como del mayor número de especies de plantas y animales de América Latina. El Tribunal destaca la importancia mundial de los ecosistemas amazónicos, los cuales regulan el clima a través de la evapotranspiración —eliminando el calor latente de la superficie y liberándolo a la atmósfera a través de la condensación y la formación de nubes—, y, además, actúan como sumideros de carbono, especialmente en las regiones no perturbadas de la selva baja amazónica, gracias a los cuales se almacenan entre 150,000 y 200,000 mil millones de toneladas de carbono”*.

Las constataciones precedentes inscriben la actividad preventiva del Estado colombiano en el presente caso en una lógica de corresponsabilidad internacional y solidaridad intergeneracional, alineada con las obligaciones del país frente al cambio climático, en particular, con la garantía del derecho a un clima sano que *“protege el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras de seres humanos y de otras especies a mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar y el equilibrio entre ellas”* (Corte IDH, OC-32/25, p. 111).

En similar sentido, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en opinión consultiva reciente sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático (Advisory opinión No. 2025/36 del 23 de julio de 2025, *Obligations of States in respect of Climate Change*), señaló que la falta de acción adecuada por parte de un Estado para proteger el sistema climático frente a las emisiones de GEI, incluyendo la producción y consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración de combustibles fósiles o la provisión de subsidios a los combustibles fósiles, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito atribuible a dicho Estado. En consecuencia, la medida adoptada a través del presente acto administrativo se enmarca en la debida diligencia del Estado colombiano para regular las emisiones de GEI en un ecosistema estratégico para la regulación climática del mundo.

En la **esfera nacional**, la Corte Constitucional (Sentencia T-080 de 2015) ha precisado que *“(...) el principio de prevención se aplica en los casos en los que es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas”*.

La conclusiones del Documento Técnico de Soporte, que resumen los análisis de impactos ambientales y acumulativos de las actividades de minería e hidrocarburos, clasifican sus hallazgos en función de la aplicación del principio de prevención y precaución, el primero de los cuales, como lo señala la Corte Constitucional, exige un nivel de certeza científica, un nivel alto de conocimiento basado en evidencia que permita conocer a detalle los impactos de la misma y tomar las medidas adecuadas para atenderlos y evitar un daño.

Dentro del estándar de conocimiento basado en evidencia, el DTS exhibe elementos demostrativos de la problemática de la deforestación en la amazonia y su relación con las actividades extractivas. La deforestación es un fenómeno multicausal que no puede ser comprendido como la suma de acciones aisladas



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

sino como el resultado de un entramado complejo de causas directas y subyacentes que convergen en dinámicas territoriales de transformación y degradación ambiental, cuya expresión más clara en esa convergencia de presiones y agentes es el arco de deforestación amazónico.

Se tiene evidencia cierta del comportamiento del fenómeno de la deforestación en los departamentos de Putumayo y Caquetá, donde la apertura de infraestructura para la explotación de hidrocarburos no sólo facilita el ingreso de actores, sino que impulsa la expansión de la frontera agropecuaria y la habilitación de actividades ilegales. Adicionalmente, los instrumentos de manejo ambiental, aun cuando contemplan medidas de control y compensación del aprovechamiento forestal, se muestra incapaz de controlar presiones externas que desbordan el alcance de los instrumentos regulatorios.

Por otro lado, a través de la Modelación de Sistemas Complejos (MSC), el análisis técnico científico desarrollado permitió evaluar los impactos acumulativos, entendiendo por estos los impactos *“que resultan de efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de proyectos, obras y/o actividades, o cuando se suman a los efectos de otros emprendimientos existentes, planificados o razonablemente previsibles”*. Este enfoque, permite considerar el efecto incremental considerando los efectos causados, no sólo por un proyecto particular, sino por la complejidad de proyectos pasados, presentes y futuros.

Para la configuración de este modelo, se tuvieron en cuenta los proyectos de hidrocarburos actualmente licenciados por la ANLA y los títulos mineros vigentes activos de acuerdo con la información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mientras que para los escenarios prospectivos (proyectos futuros) se tuvo como referencia las solicitudes vigentes en evaluación de la ANM y los bloques prospectivos reportados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El resultado de la MSC evidencia que las actividades extractivas en curso y las prospectivas de minería e hidrocarburos en el bioma amazónico configuran un entramado de impactos acumulativos que afectan de manera directa el agua superficial y subterránea, al reducir su disponibilidad y calidad; los ecosistemas terrestres y pérdida de comunidades biológicas, al fragmentar hábitats y disminuir la resiliencia ecológica; y el suelo, al acelerar procesos de degradación y pérdida de funcionalidad. Estas alteraciones, al interactuar entre sí, generan efectos en cascada que alcanzan el medio socioeconómico, con riesgos de cambios en los usos del suelo, tensiones territoriales y conflictos socioambientales.

El estudio evalúa la contribución del cambio climático en el sistema de interacciones de las presiones derivadas de actividades extractivas, encontrando que aquél actúa como un amplificador sistémico que transforma presiones locales en efectos de escala regional y global. Así, el cambio climático retroalimenta medios ya críticos, como el hidrológico, hidrogeológico, atmosférico y ecosistémico, reduciendo su estabilidad, lo cual extiende las consecuencias hacia el componente socioeconómico y cultural, aumentando la exposición de comunidades y sistemas productivos.

Con fundamento en esta evidencia, el documento técnico concluye la necesidad de declarar una zona de reserva como medida preventiva orientada a limitar la

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

expansión extractiva, reducir riesgos acumulativos y fortalecer la capacidad adaptativa frente al cambio climático.

**(Faltan impactos sobre comunidades indígenas de las actividades extractivas – Actualización DTS)**

Por otro lado, existe evidencia científica cierta sobre el riesgo de pérdida irreversible de biodiversidad de la amazonia y la actual disminución en los tamaños poblacionales de numerosas especies, contando con 119 especies en categoría de amenaza. Riesgo que se intensifica con el avance de la frontera de deforestación, aupada por las actividades de minería e hidrocarburos, amenazando la riqueza taxonómica y funcional de múltiples grupos biológicos, y de la subsistencia de las comunidades locales que dependen de estos.

Bajo esta perspectiva, el análisis técnico orienta la acción preventiva y temprana del Estado a la declaratoria de la reserva como medida para preservar la integridad ecológica y conservar la biodiversidad excepcional del bioma amazónico, para lo cual se acompaña de la promoción y avance de planes, programas, proyectos y acciones de restauración, conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente, propendiendo por el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad, como alternativas productivas para la región, como se detallará posteriormente.

De esta forma, se allanan los requisitos normativos y jurisprudenciales para la aplicación del principio de prevención ambiental, desde una esfera internacional y una esfera doméstica, basado en un conocimiento previo, sustentado en evidencia, sobre los riesgos de daño ambiental grave e irreversible, y planteando acciones tempranas y concretas que permitan su mitigación antes de que se traduzcan en escenarios irreversibles.

### **3.2. Aplicación del principio de precaución**

El principio de precaución ambiental se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano mediante el artículo 1 de la Ley 99 de 1993. De manera implícita en el numeral 1º, al aludir a los principios de la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 (principio 15), y de manera autónoma en el numeral 6º de la misma disposición.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-293 de 2002, estableció la exequibilidad de la norma en mención, señalando que cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho. Para tal efecto, debe constatar que se cumplan los siguientes elementos:

- "1. Que exista peligro de daño;*
- 2. Que éste sea grave e irreversible;*
- 3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta;*
- 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.*

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

*5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.”*

En primer lugar, en relación con la **existencia de un peligro de daño**, se estableció previamente cómo los hallazgos del DTS concluyen la existencia de un riesgo crítico sobre el bioma amazónico derivado de la posible ampliación de la frontera extractiva.

De conformidad con la información remitida por la ANM (Rad. 20252200619631 del 16 de octubre de 2025), la ampliación de la frontera extractiva, en punto de la minería, está representada por el desarrollo de los 164 títulos mineros vigentes, que abarcan un área de 104.910,47 hectáreas, entre ellos 56 títulos de mediana minería y 1 de gran minería. En cuanto a solicitudes, se cuenta la posible concesión y desarrollo de 284 solicitudes de títulos mineros, que abarcan un área de 390.230,82 hectáreas, de los cuales 138 títulos corresponden a mediana minería y 13 a gran minería.

Sumado a lo anterior, la ANM reporta la declaratoria de 183 Áreas Estratégicas Mineras, que cubren un área aproximada de 38 millones de hectáreas, las cuales fueron declaradas mediante la Resolución ANM No. 0045 del 20 de junio de 2012, acto administrativo que fue suprimido del ordenamiento jurídico por orden de la Sentencia T-766 del 16 de diciembre de 2015 de la Corte Constitucional y de conformidad con lo señalado en la Sentencia del Consejo de Estado del 2 de agosto de 2024 (Rad. 05001233300020220085700/01). Esta situación jurídica habilitaría la concesión individual de títulos, mediante el contrato de concesión ordinario establecido en la Ley 685 de 2001, sobre áreas de especial importancia ecológica en la amazonia oriental. **(Complementar con comunicaciones de la ANM al respecto)**

Por último, la ANM reporta la existencia de 10 Zonas de Reserva con Potencial, ocho de las cuales se traslapan 100% con bioma amazónico, y dos presentan superposiciones parciales (97,53 % y 90,32%, respectivamente).

De otro lado, en lo atinente a los hidrocarburos, la información entregada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Rad. 20254311908531 del 20 de noviembre de 2025) refiere la existencia de 39 contratos (contratos de exploración y explotación, contratos de exploración y producción, contratos de asociación y convenios de explotación), de los cuales cuatro se encuentran en fase de evaluación (16.324,49 Ha), 22 en fase exploratoria (1.469.568,13 Ha) y 13 en fase de producción (238.094 Ha).

La información precedente, devenida de fuentes oficiales del sector administrativo de Minas y Energía, esclarece un primer elemento de la configuración del peligro de daño. De un lado, proyecta una intensificación de las actividades mineras en el bioma amazónico, cuyos títulos pueden incrementarse hasta en un 173% respecto de los ya concedidos, pasando de 164 títulos mineros (escenario actual) a 448 títulos (escenario proyectado).

De otro lado, refiere la existencia de cerca de un millón y medio de hectáreas concedidas para la exploración de hidrocarburos, que tienen la potencialidad de avanzar hacia una fase de explotación. Igualmente, la ANH reporta la existencia de 9'988.277 hectáreas clasificadas como áreas disponibles (20,61%), es decir, que no cuentan con ninguna figura de protección ambiental que excluya el desarrollo de contratos futuros.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Como se ha venido constatando, la expansión extractiva se traduce en una amenaza para la macro región, debido a los hallazgos técnico-científicos del documento de soporte que figuran la generación de impactos ambientales acumulativos que afectan componentes esenciales del complejo ecosistémico, y que encuentran en el cambio climático un amplificador sistémico que interrelaciona presiones biofísicas (suelo, agua, atmósfera, ecosistemas) con efectos sociales, económicos y culturales.

El ejercicio de Modelación de Sistemas Complejos desarrollado en el DTS concluye que la prospectiva minera (escenario futuro) amplifica las interacciones de los impactos sobre los nodos críticos, esto es, los componentes hidrológico e hidrogeológico, que se traduce en una reducción de la disponibilidad hídrica, riesgos de contaminación y cambios en la recarga de acuíferos. De manera particular, la minería de metálicos refuerza los impactos sobre los componentes hidrogeológico e hidrológico, mientras que la minería de sedimentos intensifica las presiones sobre la fauna y la flora, comprometiendo la resiliencia de los ecosistemas amazónicos.

Del lado de la prospectiva de hidrocarburos, el DTS concluye que esta refuerza presiones sobre los componentes socioeconómicos y culturales, ampliando la frontera extractiva hacia los territorios de las comunidades locales.

De igual forma, el soporte técnico elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible permite establecer un nexo entre el desarrollo de actividades mineras y petroleras, y la agudización del fenómeno de la deforestación, advirtiendo escenarios irreversibles.

La Corte Suprema de Justicia, al momento de declarar la amazonia como entidad sujeta de derechos (Sentencia STC4360-2018), se ocupó de analizar la aplicabilidad del principio de precaución ambiental en relación con la problemática de la deforestación en la amazonia, verificando el presupuesto de peligro de daño, así:

*“11.1. Relativo al primero de los anotados principios, no cabe duda que existe peligro de daño, por cuanto, según el IDEAM, el aumento de las emisiones GEI provocado con la deforestación de la selva amazónica, generaría un incremento de la temperatura en Colombia, entre '0,7 y 1,1 grados centígrados entre el 2011 y 2024', en tanto que para el período comprendido entre '2041 y el 2070', se calcula un aumento de '1,4 y 1,7' grados centígrados, para alcanzar hasta 2,7 grados centígrados 'en el periodo de 2071 a 2100'.*

*“Igualmente, la reducción de las masas forestales amazónicas rompería la conectividad ecosistémica de esta con los Andes, causando la probable extinción o amenaza de la subsistencia de las especies habitantes de ese corredor, generando 'daños en su integridad ecológica'.*

*Asimismo, según el IDEAM, la emisión GEI por deforestación provocaría, respecto de las precipitaciones, dos tipos de consecuencias. La primera, un aumento en varias regiones del país, situación que desencadenaría incremento en los niveles de los cauces, y por ende, de escorrentías, generando la propagación de agentes contaminantes derivados del agua. Y la segunda, un déficit en otros departamentos patrios, causando la disminución del recurso hídrico, así como prolongadas sequías”.*

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

En segundo término, frente al carácter **grave e irreversible del riesgo** generado por cuenta del desarrollo minero y petrolero en el bioma amazónico, este se encuentra plenamente demostrado en múltiples de las variables analizadas en el DTS, tales como: el debilitamiento del fenómeno hidrológico de los ríos voladores, la fragmentación de la conectividad ecológica en la transición Andes–Amazonía, la degradación de ecosistemas estratégicos, la presión sobre los recursos hídricos, la pérdida progresiva de servicios ecosistémicos esenciales, y la posible ocurrencia de un punto de no retorno o “Tipping Point” amazónico, en el cual esta unidad biogeográfica pierda su capacidad de regeneración.

La gravedad del riesgo de debilitamiento de los ríos voladores se constata por la existencia de estudios convergentes sobre la importancia de los mismos para transportar hasta un 50% de la humedad que alimenta la precipitación en la cordillera oriental y en páramos como Chingaza, que cumplen un rol fundamental para el suministro de agua en la capital y el centro del país.

De forma que los riesgos advertidos no se ciernen exclusivamente sobre el bioma mismo, sino que extienden sus impactos a los páramos, subpáramos y nacimientos de agua de la región andina, objeto de protección especial por cuenta del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y que soportan el suministro de agua para la mayor parte de la población del país. Al respecto, existe evidencia científica sobre la contribución amazónica en la recuperación de embalses como Chivor, Guavio y Chuza durante el Fenómeno de El Niño 2023–2024. De esta forma, el deterioro ambiental de la amazonia, como consecuencia de la realización de actividades extractivas, agravaría futuros episodios de sequía y comprometería la seguridad hídrica y energética del país.

Igualmente, resalta la amenaza de transformación del ecosistema amazónico de selva húmeda tropical a sabana tropical, lo cual significaría un punto de no retorno en el equilibrio ecológico del continente. La selva amazónica no podría volver a su estado original, y con ella se perderían especies endémicas, procesos evolutivos y funciones ecosistémicas que han tardado millones de años en consolidarse. El DTS también alerta sobre la fragmentación de hábitats producto de la deforestación y la expansión extractiva, en particular en el arco de deforestación Andes–Amazonía. Este fenómeno interrumpe flujos genéticos y reduce la capacidad de adaptación de especies, comprometiendo la conectividad ecológica regional.

En materia climática, la conversión de la Amazonía en una fuente neta de carbono alteraría irreversiblemente el balance atmosférico global. La liberación del carbono almacenado en su biomasa, calculado actualmente en 3,43 gigatoneladas, contribuiría a la aceleración del calentamiento global y afectaría el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Colombiano en materia de protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, en la prevención y reducción de las causas del cambio climático, y las metas de reducción de emisiones de GEI establecidas a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Acuerdo de París. Esta situación no solo incrementaría la frecuencia de eventos extremos en Colombia, sino que agravaría crisis hídricas, de salud y de seguridad alimentaria en toda América Latina.

A ello se suma la amenaza del “Tipping Point” amazónico; un umbral crítico en el que la selva pierde su capacidad de regeneración y se transforma en un



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

ecosistema degradado. La irreversibilidad de este cambio convierte el riesgo en un peligro de gran magnitud que, de materializarse, supondría no solo la pérdida de biodiversidad a escala continental, sino también una alteración drástica del ciclo hidrológico y la liberación masiva de carbono acumulado.

En el plano social y económico, el DTS muestra cómo la degradación amazónica afecta directamente a comunidades que dependen de la pesca, la agricultura de subsistencia y el uso sostenible de recursos naturales. La pérdida de medios de vida, sumada al avance de economías ilegales y conflictos socioambientales, provocaría desplazamientos forzados y la disolución de estructuras comunitarias. Estos impactos, al amenazar derechos fundamentales individuales y colectivos, como el agua, la alimentación, la salud, el ambiente sano, el territorio, la identidad e integridad cultural, constituyen un daño de carácter estructural e irreparable.

En suma, la declaratoria de la presente Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico se adopta también en atención al deber reforzado del Estado de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la amazonía. La reserva es un mecanismo idóneo para avanzar en la protección integral de estos territorios, superando las omisiones históricas y previniendo daños irreversibles a la integridad étnica y cultural de los pueblos étnicos, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de las órdenes proferidas por la jurisprudencia constitucional e interamericana.

Al respecto, la Corte IDH (OC-32/25) señaló que *“la situación actual constituye una **emergencia climática** que se debe al aumento a acelerado de la temperatura global, producto de diversas actividades de origen antropogénico, producidas de manera desigual por los Estados de la comunidad internacional, las cuales afectan de manera incremental y amenazan gravemente a la humanidad y, especialmente, a las personas más vulnerables”*. En tal medida, la Corte IDH señala que los Estados tienen obligaciones específicas ante situaciones de especial vulnerabilidad como las que enfrentan, entre otros, los pueblos indígenas, tribales, afrodescendientes, y comunidades campesinas y de pescadores.

En tercer lugar, en lo que hace relación al **principio de certeza científica**, la Corte Constitucional ha definido que es posible adoptar medidas en ausencia de certeza científica absoluta, pero deben concurrir al menos indicios científicos que permitan advertir la potencialidad de un daño (Sentencia SU-018 de 2024).

Adicionalmente, conviene señalar que la Corte Constitucional (Sentencia C-339 de 2002), declaró la exequibilidad condicionada de los incisos tercero y cuarto del artículo 34 del Código de Minas, referidos a la necesidad de contar con estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras a efectos de la exclusión minera, en el sentido que la autoridad ambiental deberá aplicar el principio de precaución, precisando que *“en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba una grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”*.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

El DTS incorpora una evidencia científica suficiente que permite cumplir este estándar al fundamentarse en estudios de modelación de sistemas complejos, análisis de redes ecológicas, imágenes satelitales y registros climatológicos históricos. (Para revisión de ANLA)

Como ha quedado visto, el DTS constituye el principal referente técnico que sustenta la adopción de la medida de la reserva. Con tal propósito, relaciona elementos demostrativos que articulan un conocimiento basado en evidencia (principio de prevención), así como modelaciones científicas que conducen a un principio de certeza científica (principio de precaución). Estas últimas, aunque incorporan simulaciones y supuestos, se encuentran validadas metodológicamente con datos históricos y otra información verificable de soporte, lo que permite inferir, con un alto grado de confianza científica, impactos futuros o consecuencias sistémicas que puede desencadenar la degradación ecológica del bioma amazónico, auspiciada por la ampliación de la frontera extractiva.

De esta forma, aunque no se pueda determinar con precisión aspectos como el año o el umbral en el que el bioma amazónico alcanzará un punto de no retorno, la evidencia acumulada demuestra que la tendencia actual nos acerca peligrosamente a ese escenario.

Esto se corresponde con el nivel de certeza científica que exige la Corte Constitucional para activar medidas precautorias, reforzado por las obligaciones derivadas de instrumentos internacionales vinculantes al Estado colombiano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta última que ordena a las partes a tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y a no posponer medidas en escenarios de falta total de certidumbre científica, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible.

En cuanto al cuarto requisito, referido a la **adecuación de la medida para impedir la degradación del ambiente y la materialización del riesgo**, la declaratoria de una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo en el bioma amazónico constituye una medida idónea y necesaria para garantizar la protección integral de este ecosistema estratégico, que representa más del 40% del territorio nacional y desempeña funciones esenciales en la regulación climática, hídrica y en la captura de carbono del continente y del mundo.

La Reserva, como medida administrativa, plantea una exclusión de concesión y autorización de uso a particulares, en los términos previstos en el inciso segundo del artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, limitando la concesión de nuevos títulos mineros y contratos de hidrocarburos, así como el otorgamiento de permisos o licencias ambientales para el desarrollo de tales actividades.

Esta medida es conducente para impedir que se materialicen los riesgos arriba identificados, en relación con el análisis de impactos ambientales e impactos acumulativos previstos por cuenta de la ampliación de la frontera extractiva y la intensificación de las actividades de explotación de minerales e hidrocarburos.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Si bien el bioma amazónico cuenta con figuras de ordenamiento ambiental como las áreas protegidas del SINAP y la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959, cerca del 26% del bioma carece de figuras de protección definitiva, situación que deja extensas áreas expuestas a la degradación ecosistémica. No obstante, la “Zona de Reserva Forestal de la Amazonía” (L.2/59), admite el trámite de sustracción para el desarrollo actividades de minería e hidrocarburos. La posibilidad de sustracción ha permitido la localización de proyectos licenciados por las autoridades ambientales, así como la asignación de sendos títulos mineros. Aunque estas actividades se desarrollan bajo el marco regulatorio vigente, generan condiciones que propician procesos indirectos como la apertura de vías, el aumento de accesibilidad y, en consecuencia, la ampliación de los frentes de deforestación.

Igualmente, una parte sustancial del área sin figuras de protección definitiva corresponde a territorios indígenas y resguardos indígenas, custodiados ancestralmente por sus autoridades propias, pero que tampoco constituyen un amparo definitivo, a la luz del marco jurídico actual, frente al desarrollo de las mencionadas actividades de alto impacto.

Finalmente, es pertinente recordar que el Convenio de Diversidad Biológica orienta el desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible de las zonas adyacentes a áreas protegidas, razón por la cual la Reserva de Recursos Naturales Renovables persigue aumentar la protección de estas zonas adyacente a las áreas protegidas ya declaradas en la amazonia.

De forma complementaria, la Reserva de Recursos Naturales Renovables promueve el desarrollo de programas, planes y proyectos orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico, así como a la transformación socioecológica de los territorios y la promoción de una economía forestal y de la biodiversidad sostenible.

De esta forma, la exclusión de concesión y autorización de uso a particulares se complementa con programas, planes y proyectos orientados a atender los otros factores desencadenantes de la deforestación en el bioma amazónico, a través de un proceso de transición económica hacia la consolidación de comunidades forestales, biodiversas y sostenibles como modelos de desarrollo rural en áreas de importancia ecológica para el país; capaces de contener la deforestación, reducir las brechas sociales y promover la economía forestal.

En este sentido, la creación de una figura de protección es adecuada en términos científicos y ambientales, coadyuvando a la conservación de la biodiversidad, conectividad ecológica y la regulación climática e hidrológica. Y es coherente con el ordenamiento jurídico colombiano y las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bajo este marco, la delimitación geográfica de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo corresponderá a la totalidad del área reconocida como Bioma Amazónico Colombiano por parte de la entidad científica del SINA especializada en los estudios amazónicos, esto es, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, configurándose como un instrumento necesario para suplir vacíos normativos, complementar la regulación existente y fijar la política ambiental de la amazonia en materia de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, y consolidar la salvaguarda de este bioma frente a dinámicas extractivas y de transformación territorial.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Finalmente, la decisión que fundamenta la aplicación del principio de precaución ambiental se adopta mediante un **acto administrativo plenamente motivado**, cuyos argumentos de orden técnico y legal se encuentran plasmados en el presente acto administrativo, la memoria justificativa que lo acompaña y el Documento Técnico de Soporte que hará parte integral del presente acto administrativo.

#### 4. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA A ADOPTAR

El desarrollo jurisprudencial de la aplicación del principio de precaución en sede administrativa complementa los requisitos esbozados por la sentencia hito C-293 de 2002, abordados previamente, en el sentido de recomendar que se evalúe la proporcionalidad de la medida a través de las afectaciones que puede generar sobre **los derechos e intereses de terceros**.

La Corte Constitucional, en Sentencia SU-018 de 2024, señala que las decisiones en aplicación del principio de precaución, bajo la perspectiva de la proporcionalidad, deben ser (i) idóneas para proteger el medio ambiente o la salud pública y (ii) necesarias ante la ausencia de otras medidas que causen menores impactos. Además, (iii) sus beneficios deben ser superiores a los costos.

El Consejo de Estado, Sección Tercera (Rad. 110010326000201600140-00), ha determinado por su parte que la aplicación del multicitado principio, en un juicio de legalidad, presupone los siguientes criterios: (i) la incertidumbre científica acerca del riesgo, es decir, la falta de certeza sobre el daño; (ii) la evaluación científica del riesgo, que es equivalente al principio de certeza científica; (iii) la identificación del riesgo, un daño cualificado que sea grave e irreversible; y (iv) la proporcionalidad de las medidas.

Los primeros tres criterios fueron abordados con suficiencia en los acápites anteriores, de manera que se pasa a analizar los elementos constitutivos de la proporcionalidad, no sólo frente a los escenarios de conocimiento adscritos al principio de precaución, sino de manera general frente al ejercicio preventivo para la protección del bioma amazónico, en sus variados niveles de conocimiento científico y certeza.

Frente a la proporcionalidad de las medidas, el Consejo de Estado (Rad. 110010326000201600140-009) explica que hace referencia a la simetría entre los fines de la administración y los medios empleados para alcanzarlos. Así, para verificar la proporcionalidad de un acto administrativo, en este caso regulatorio, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo recomienda analizar: “(a) la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas que incorpora; (b) la necesidad de regular técnicamente la actividad en atención a los riesgos que comporta su desarrollo para el medio ambiente y a la salud humana; (c) que la regulación técnica contenga ‘medidas eficaces [idóneas] para impedir la degradación del medio ambiente’, y (d) que satisfaga el principio de proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que el provecho que supone la actividad se logre a través de la regulación técnica con el menor grado de afectación al medio ambiente”.

Orientados por el estándar constitucional y de legalidad descrito, se procede a argumentar el cumplimiento de los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida, como límites constitucionales de la discrecionalidad del Estado. A partir de la verificación de las afectaciones a

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

los derechos e intereses de terceros, se ejerce la función regulatoria del Estado para adoptar las medidas necesarias para garantizar los beneficios que persigue, al tiempo que se generan los menores costos en términos de garantía de derechos y frente a intereses de terceros.

#### **4.1. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto**

La medida es **idónea**, por cuanto los medios escogidos para la consecución del fin perseguido son adecuados (Sentencia C-022 de 1996). El ejercicio técnico-científico formulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible advierte un riesgo ambiental crítico sobre la integridad ecológica del bioma amazónico y los derechos colectivos y bioculturales de los pueblos y comunidades que lo habitan.

Este riesgo está directamente asociado a la potencial ampliación de la frontera extractiva de minería e hidrocarburos, y se materializa en la acumulación de los impactos de las actividades presentes junto a los impactos de las actividades que a futuro se podrían desarrollar, en virtud de la concesión de nuevos títulos mineros y contratos para la explotación de hidrocarburos, así como por el desarrollo productivo de estos y de los proyectos que hoy se encuentran actualmente en exploración. Igualmente, por la incidencia de nuevos proyectos extractivos en la intensificación de la deforestación en la amazonia, con evidencia científica que apunta a escenarios irreversibles.

En consecuencia, la medida de la reserva de recursos naturales renovables, estipulada en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales (DL. 2811/74) es idónea, toda vez que permite reservar los recursos del bioma amazónico y excluir su uso de concesiones y autorizaciones a particulares. En tal medida, faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como rector de la gestión del ambiente en el país y competente para fijar la política ambiental de la amazonia como de interés nacional, a orientar la Reserva en términos de la exclusión de nuevos títulos mineros; concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, prerrogativas de explotación, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales en el bioma amazónico.

Igualmente, excluye el área reservada de nuevos contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica -TEA, ni cualquier otra modalidad contractual para la exploración o explotación de hidrocarburos.

Asimismo, inhibe el otorgamiento de nuevos permisos o licencias ambientales, en cualquiera de sus modalidades, para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.

De esta forma, la medida es idónea y conducente para intervenir directamente el riesgo identificado, consistente en la ampliación e intensificación de las actividades extractivas en un complejo ecosistémico que representa un área de especial importancia ecológica para el país, y para la preservación de la diversidad étnica y cultural de la Nación, el cual fue declarado sujeto de derechos y titular de la protección del Estado.

No cabe duda que el objetivo perseguido con la medida es la protección del ambiente y, en consecuencia, de los medios de vida de las comunidades locales y, de manera más amplia, de toda la población del país, sobre la base del conocimiento, cada vez más profundo, de las conexiones ecosistémicas que



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

existen entre la amazonia, los andes y el pacífico, y su rol fundamental para el suministro de agua para la población de la cordillera y la regulación climática a nivel país.

En segundo lugar, la medida es **necesaria** ante la ausencia de otras medidas que causen menores impactos. La jurisprudencia nacional ha exhortado a las autoridades del orden nacional ha reestructurar el ordenamiento ambiental y minero, en función de la protección de áreas que por sus características excepcionales no debieran ser objeto de actividades de alto impacto, como la minería o los hidrocarburos.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-443 de 2009, exhortó al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al igual que a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales competentes, *“para que cumplan con los distintos deberes ambientales a su cargo y, por una parte, avancen en la declaración y delimitación de las zonas excluidas de la minería y por otra parte adopten medidas eficaces para la protección del medio ambiente en general y de las áreas de especial importancia ecológica”*.

Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia conocida como de la Ventanilla Minera (Rad. 250002341000-2013-02459-01), señaló la existencia de un insuficiente ordenamiento territorial minero ambiental, que trasgredió los derechos colectivos en litigio, en razón, entre otros asuntos, a la forma en que se están aplicando los artículos 34 y 36 del Código de Minas, a los títulos mineros concedidos en áreas que debían ser objeto de exclusión o restricción, y a que las reservas de recursos naturales de carácter temporal no protegieron todos los ecosistemas estratégicos del país.

Por ello, con fundamento en la necesidad de proteger el bioma amazónico colombiano, declarado por ley como de interés nacional en su preservación (L.99 de 1993, art. 5), se observa necesaria su protección frente al desarrollo de nuevas actividades de explotación minera y de hidrocarburos, con el objeto de precaver los daños graves e irreversibles ya mencionados, como el debilitamiento del de los “ríos voladores”, la fragmentación de la conectividad ecológica en la transición andino-amazónica, la degradación de ecosistemas estratégicos, la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales como la regulación climática, y el arribo a un punto de inflexión o no retorno en la amazonia, que transforme radicalmente la composición del bioma y su capacidad de regeneración.

Si bien, en la actualidad, las actividades mineras formales y de hidrocarburos se encuentran amparadas por el régimen de licenciamiento y permisos ambientales, la evidencia científica apunta a su insuficiencia. A partir del análisis de imágenes satelitales se ha confirmado cómo los proyectos de hidrocarburos que habilitan vías secundarias y terciarias al interior del bioma favorecen la extracción ilegal de madera y estimulan la expansión de la frontera de deforestación, asuntos sobre los cuales las medidas de compensación y mitigación sujetas a seguimiento se muestran incapaces de corregir los daños.

Asimismo, el DTS permite una evaluación estratégica del territorio, en función de los impactos acumulativos de las actividades pasadas, presentes y proyectadas, bajo un escenario de variabilidad y cambio climático, que orienta como medida principal la restricción general de nuevas actividades extractivas

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

de minería e hidrocarburos en el bioma amazónico, sin que se avizore otro medio ordinario para lograr el fin perseguido.

Finalmente, la necesidad de la medida se justifica en la insuficiencia de otras figuras de protección ambiental u ordenamiento del territorio presentes en el bioma amazónico, como la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia y los resguardos indígenas, los cuales configuran una limitación definitiva frente a las actividades extractivas, así como por la carencia absoluta de figuras de protección ambiental en un 26% del territorio del bioma amazónico.

En tercer lugar, la medida es **proporcional en sentido estricto**, porque los bienes jurídicos y derechos protegidos con la medida son notoriamente superiores a la restricción sobre derechos o intereses de terceros. En todo caso, como se verá a continuación, el análisis de proporcionalidad conduce a la administración a adoptar una visión regulatoria, no prohibicionista, sobre las actividades de minería e hidrocarburos en el bioma amazónico. Por esta razón, en garantía de los derechos humanos y los derechos de los pueblos étnicos, de la seguridad jurídica y del desarrollo sostenible de los territorios, se imparten una serie de lineamientos que acompañan la medida adoptada con el propósito de maximizar la relación positiva de sus beneficios.

A nivel jurídico, la medida persigue la protección de un bien de primer orden: el ambiente. Desde los inicios de su jurisprudencia (Sentencia T-411 de 1992 y C-058 de 1994), la Corte Constitucional señaló que la protección del ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano que la Constitución contiene una “*constitución ecológica*” conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente.

En complemento, la Corte señala que la constitución ecológica y la protección del ambiente tienen una triple dimensión en nuestro ordenamiento. Como principio, en la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la Nación (CP. art. 8), como derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano (CP. art. 79), y como obligaciones a las autoridades y los particulares. Entre ellas, el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.

El Código de Recursos Naturales, en similar dirección, establece en su artículo 1º que el ambiente es patrimonio común, por lo que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. Como también lo es la preservación y manejo de los recursos naturales renovables. Igualmente, se tiene el *Convenio sobre la diversidad biológica* de 1992, aprobado por la Ley 165 de 1994, según el cual la conservación de la diversidad biológica es interés de toda la humanidad. Igualmente, los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones vinculantes para los Estados parte en materia de garantía de protección del sistema climático y del ambiente frente a los GEI (CIJ, OC.2025/36).

En ese orden, la reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros asuntos ya expuestos, que relieves la protección de la integridad de amazonia como un

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

asunto de interés público y estratégico nacional, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 (núm. 40).

El ambiente sano y los servicios ecosistémicos múltiples que presta el bioma amazónico, son un presupuesto para la garantía de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, el derecho al agua, y los derechos diferenciados de las comunidades y pueblos étnicos, como el derecho a la identidad colectiva, a la integridad cultural, al territorio y a la subsistencia.

De forma que a la preservación del bioma amazónico le es inherente el mayor grado de valía y legitimidad en cuanto a la adopción de medidas por parte de la administración tendientes a la garantía de derechos fundamentales y al cumplimiento de las obligaciones ambientales, nacionales e internacionales, relacionadas con la prevención de los factores de deterioro ambiental, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la reducción de gases efecto invernadero.

Ahora bien, la adopción de la medida de la reserva se relaciona directamente con las vidas de los pueblos indígenas, las comunidades negras y afrocolombianas, el campesinado, entre las poblaciones más relevantes que habitan esta porción territorial. Igualmente, se vincula directamente con el desarrollo de las economías locales y las situaciones jurídicas establecidas con los titulares de concesiones o autorizaciones para la exploración y/o explotación de minerales e hidrocarburos.

Bajo tal circunstancia, una medida general, que no atienda a las particularidades propias de los territorios y sus figuras de ordenamiento y gobierno propio, o que genere una prohibición absoluta e inmediata de las actividades mineras y de hidrocarburos, como lo recomiendan los hallazgos científicos, puede generar efectos contraproducentes frente a los objetivos fijados o generar cargas desproporcionadas sobre los derechos e intereses de terceros.

En consecuencia, en los acápites posteriores se sustenta el estándar de proporcionalidad de la medida respecto de los escenarios de tensión entre los derechos y los bienes jurídicos identificados. En uso de la potestad reglamentaria de la administración, y resaltando la facultad otorgada a este ministerio para fijar la política ambiental de la amazonia (L.99/93, art. 5, núm. 40), se adoptan determinaciones específicas frente a los escenarios analizados.

#### **4.2. Territorios indígenas, gobierno propio y derechos de los pueblos**

(La versión definitiva de este capítulo será producto del diálogo intercultural con las autoridades indígenas en el marco de la consulta previa y la coordinación institucional)

El bioma amazónico es un territorio mayoritariamente indígena. Los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas constituyen la base del manejo territorial de la amazonia, en mayor grado en su franja oriental, y ofrecen respuestas sistémicas a las presiones y amenazas sobre su integridad. El gobierno propio ejercido en los territorios indígenas ha demostrado ser altamente efectivo en la protección del bioma, con tasas mínimas de deforestación.

En la amazonia existen formas consolidadas de gobernanza territorial indígena que articulan los sistemas de conocimiento tradicional con la gestión del

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

territorio y el ejercicio de autoridad desde las instituciones propias. Dentro de dicho ordenamiento, resalta la reciente formalización de 8 territorios indígenas ubicados en los departamentos de Vaupés y Amazonas como entidades territoriales, formalizados mediante acuerdos interculturales, de conformidad con el artículo 286 de la Constitución Política y los decretos legislativos 632 de 2018 y 488 de 2025. **A la fecha existen otros X territorios en proceso de formalización como Entidades Territoriales Indígenas en el bioma amazónico. En conjunto, los territorios indígenas mantienen el 99,5% de sus coberturas naturales intactas y sus bosques representan el 41% del total de los existentes en la región al 2023.**

Cada territorio indígena formalizado y en proceso de formalización cuenta con un Plan de Vida que guía el funcionamiento, la planeación y el seguimiento de acciones en su jurisdicción, y sienta los principios que regulan el ordenamiento y la política territorial para hacerlo efectivo.

De otro lado, de conformidad con la información consignada en el DTS, en el bioma amazónico se encuentran 231 resguardos indígenas que cubren alrededor de 27 millones de hectáreas, en los que viven al menos 64 pueblos indígenas. Lo anterior representa aproximadamente el 55% de todo el territorio amazónico.

Adicionalmente, en el bioma amazónico hacen presencia la totalidad de Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y sus territorios, que gozan de una especial protección por parte del Estado sobre la base de los principios de autodeterminación y no contacto, intangibilidad territorial, precaución, interdependencia territorial, corresponsabilidad y participación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1232 de 2018, que adicionó el Decreto 1066 de 2015, y adoptó medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos en Aislamiento o Estado Natural y se creó y organizó un Sistema Nacional con tal fin.

Con base en lo anterior, la declaratoria de una reserva ambiental en el bioma amazónico tiene como punto de partida el reconocimiento del gobierno indígena del territorio, de la asociación inescindible entre el territorio, la naturaleza, los pueblos y el conocimiento, y de la comunión de interés que existe entre la obligación del Estado de proteger la naturaleza y prevenir el deterioro ambiental, y la labor histórica, ancestral, de cuidado y defensa del territorio y la vida de los pueblos indígenas amazónicos, asuntos que, traducidos en el lenguaje occidental de los derechos humanos, han sido promovidos recientemente como derechos bioculturales (Sentencia T-622 de 2016).

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por la Ley 2294 de 2023, estableció que los fundamentos definidos por los pueblos y comunidades indígenas serán vinculantes para todos los actores públicos y privados en sus territorios y territorialidades. Conforme lo anterior, la medida de reservar los recursos naturales renovables del bioma amazónico frente a actividades mineras y de hidrocarburos es positiva para los pueblos indígenas amazónicos, en tanto acoge los mandatos culturales de sus autoridades espirituales, según los cuales la explotación minera con fines económicos no tiene lugar en el territorio amazónico (OPIAC, 2024).

Adicionalmente, la medida garantiza la integridad y diversidad étnica y cultural de las comunidades, su identidad e incluso su propia pervivencia, considerando las graves consecuencias sociales, culturales y ambientales que los pueblos indígenas han denunciado frente a las actividades extractivas y que han sido

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

reconocidas en sendos fallos judiciales a nivel nacional e internacional (Sentencias T-622 de 2016; T-106 de 2025). De esta forma, se advierte cómo la minería y los hidrocarburos han desencadenado procesos de reconfiguración territorial, social y cultural, debilitando los sistemas de conocimiento ancestral que son fundamentales para la preservación y manejo del ecosistema amazónico (OPIAC, 2024).

De acuerdo con información oficial, de las 102 mil hectáreas concesionadas mediante títulos mineros en la región amazónica, 78 mil se traslapan con territorios indígenas. Asimismo, de las 438 mil hectáreas en solicitud de concesión, 334 mil se traslapan con resguardos indígenas. Estas cifras develan una incidencia clara de la actividad minera sobre los territorios colectivos indígenas.

Por último, la medida constituye una acción de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, de conformidad con las obligaciones del Estado de garantizar el derecho al no contacto y la salvaguarda de tales pueblos, y su derecho al territorio (Corte IDH, OC 32/2025).

En todo caso, la medida debe armonizarse con los parámetros de autonomía de los pueblos indígenas, entendida como la facultad para darse su propia organización social, económica y política, y el derecho que tienen a decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de conformidad con sus referentes culturales y sistemas de conocimiento.

Lo anterior, con fundamento en el carácter pluralista del Estado y la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, establecidos en la Constitución Política de 1991, así como en la jurisprudencia nacional e interamericana sobre el derecho al territorio y la libre autodeterminación de los pueblos.

Por tanto, en la parte resolutive del presente acto se hará explícito que la reserva de recursos naturales no constituye una figura de ordenación o gobierno del territorio y, por tanto, no interfiere ni sustituye el ejercicio de competencias y funciones de los Territorios Indígenas, ni el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas en sus resguardos u otras figuras territoriales, ni sus competencias en materia ambiental, de conformidad con lo establecido en los Decretos Ley 1953 de 2014, 632 de 2018, 1275 de 2024, 488 de 2025 y demás normatividad aplicable.

De otro lado, considerando que los pueblos indígenas son aliados estratégicos y necesarios para la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático en el bioma amazónico, a partir de su espiritualidad y conocimientos ancestrales, y como quiera que la reserva a declarar promueve la formulación y el avance de programas, planes, proyectos y acciones orientados a la restauración, conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente, estos deberán ser implementados en coordinación con las autoridades indígenas de los territorios indígenas formalizados o en proceso de formalización como entidades territoriales, y garantizando el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, según corresponda.

En tal sentido, los distintos instrumentos de política pública que buscan el control y la contención de la deforestación prevén y reconocen que la participación de los pueblos indígenas es fundamental en la restauración, conservación, preservación y uso sostenible de los bosques. Así, la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques del Ministerio de Ambiente



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

y Desarrollo Sostenible cuenta con una línea estratégica denominada Gestión sociocultural de los bosques y conciencia pública. Su objetivo es consolidar la gobernanza territorial de los grupos étnicos, comunidades campesinas y rurales, y fortalecer la conciencia ciudadana, a través de la gestión de información y conocimiento para consolidar una cultura de corresponsabilidad para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los bosques. Para lo anterior, cuenta con 7 medidas dentro de las cuales se destacan la optimización de la coordinación entre los grupos étnicos con las instituciones para la armonización de sus instrumentos de planeación del desarrollo sectorial y el ordenamiento territorial con enfoque diferencial y de género; el fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y negros para la gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques; el fortalecimiento de los instrumentos que consolidan los derechos territoriales de los grupos étnicos en focos de deforestación y áreas estratégicas de conservación de bosques; la implementación de sistemas de conservación y restauración propios en territorios de grupos étnicos

En ese mismo sentido, en el Plan Integral de Contención de la Deforestación 2023-2026 se reconoce a los pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas como actores fundamentales. Este Plan *“traza el camino para generar transformaciones socioecológicas en los territorios que concentran la mayores tasas de deforestación del país, de tal forma que se inicie un proceso de transición económica hacia la consolidación de comunidades forestales, biodiversas y sostenibles como modelos de desarrollo rural en áreas de importancia ecológica para el país; capaces de contener la deforestación, reducir las brechas sociales, promover la economía forestal y de la biodiversidad, y posibilitar la consolidación de paz en los territorios. EL PICD sentará las bases del desarrollo de una cultura forestal como un cambio de paradigma para conservar la selva en pie, a través de la creación y/o fortalecimiento de los procesos de gobernanza de pueblos indígenas, comunidad negras y campesinos”* (PICD 2023-206, p 20). Dentro de los objetivos de este Plan está el de fortalecer procesos de ordenamiento ambiental territorial, bajo el reconocimiento de las comunidades en el territorio (campesinos, indígenas y comunidades negras), enfocados a asegurar la conectividad ecológica e incorporando soluciones basadas en la naturaleza.

Igualmente, los programas, planes y proyectos deberán respetar las competencias en materia ambiental de las autoridades ambientales, considerando especialmente los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 1275 de 2024 *“Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades”*, según los cuales las autoridades indígenas tienen competencias ambientales en materia de ordenamiento ambiental territorial, determinación de los mecanismos regulatorios de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y manejo de los recursos naturales en sus territorios.

La declaración de la presente reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico constituye una medida administrativa adecuada e idónea, alineada con la declaratoria de importancia estratégica establecida en el CONPES

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

4174 de 2025 que tiene por objeto restaurar la selva amazónica para garantizar la estabilidad climática y la regulación hídrica a nivel nacional.

Las acciones de restauración siempre se han planteado y robustecidos mediante un diálogo intersectorial con los pueblos indígenas, quienes han participado históricamente en la planeación y ejecución de estrategias de restauración ecológica y cuidado del territorio, garantizando que las acciones en la región Amazónica respondan a las realidades y sistemas de conocimiento locales. Esta articulación busca armonizar las metas de recuperación de la selva Amazónica con los planes de vida y sistemas de conocimiento tradicional, reconociendo que la participación social efectiva es el único camino para lograr la sostenibilidad de las intervenciones y la recuperación de la naturaleza perdida en los territorios estratégicos del Amazonas.

Asimismo, las acciones de restauración, preservación y uso sostenible, deberán asegurar la protección de los conocimientos tradicionales y el patrimonio biológico de los pueblos indígenas, evitando su apropiación indebida o uso sin consentimiento, de conformidad con las Decisiones 391/96, 486/00 y 523/00 de la Comunidad Andina de Naciones, y demás normatividad aplicable.

De otro lado, en atención a lo dispuesto en el capítulo XIV, título tercero, de la Ley 685 de 2001, que reconoce los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades indígenas y habilita figuras especiales para la exploración y explotación de minerales por parte de las mismas, y considerando la existencia de seis Zonas Mineras Indígenas declaradas al interior del bioma, con un área total de 403.585 hectáreas, se considera pertinente habilitar la concesión de títulos mineros y autorizaciones ambientales para la explotación de minerales en dichas áreas, siempre y cuando sean desarrolladas exclusiva y directamente por las comunidades indígenas, a pequeña escala, y se encuentren acordes con sus Planes de Vida.

En conclusión, la declaratoria de la presente Reserva de Recursos Naturales Renovables es proporcional frente a los derechos de los territorios indígenas y pueblos indígenas amazónicos, por cuanto garantiza la integridad étnica y cultural de los mismos, atiende a sus mandatos culturales para la protección de los territorios y no interfiere los límites de su autonomía y gobierno propio, para lo cual se adoptan una serie de disposiciones para armonizar la medida con su derecho a la libre autodeterminación.

#### **4.3. Derechos de las comunidades negras, afrocolombianas**

(La versión definitiva de este capítulo será producto del diálogo intercultural con las autoridades indígenas en el marco de la consulta previa)

La reserva de recursos naturales a declarar se relaciona con las dimensiones ambiental y minera de las comunidades negras que habitan el bioma amazónico. A pesar de no figurar entre los territorios ancestrales del pueblo negro en el país, hay una presencia significativa en el bioma amazónico de 36 consejos comunitarios con territorios colectivos titulados.

La Ley 70 de 1993, en su capítulo IV, estableció las reglas para el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y el ambiente en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. De esta manera, se reconocieron usos por ministerio de la ley y se erigieron obligaciones de protección del ambiente y los recursos naturales. Este capítulo

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

fue reglamentado por el Decreto 1384 de 2023 que, entre otros asuntos, reguló los Planes de manejo ambiental y los reglamentos internos de los territorios colectivos, como mecanismo propio de gobierno, administración y manejo ambiental de los territorios, y dispuso la articulación de la gestión ambiental de las autoridades ambientales con los consejos comunitarios.

Como se constata en el DTS, la población afroamazónica ha desempeñado un papel decisivo en la protección de los bosques y las aguas, mediante prácticas agroalimentarias diversificadas, medicina tradicional y autogobierno comunitario. Así, se evidencia la importancia de respetar el manejo y gestión del territorio por parte de las comunidades de cara a la protección de la diversidad biológica y cultural.

Por su parte, el capítulo V de la Ley 70 de 1993 adoptó condiciones especiales y diferenciales para promover la exploración y la explotación de los recursos naturales no renovables por parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en sus territorios. La minería, para el pueblo negro, está intrínsecamente relacionada con su historia de libertad e independencia, razón por la cual hace parte de su ancestralidad (Sentencia T-105 de 2025).

El Decreto 1396 de 2023 reglamentó el capítulo V en mención, y adoptó mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre los cuales se encuentran las zonas mineras de comunidades negras, el derecho de prelación y el contrato de concesión minera especial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

De acuerdo con la Corte Constitucional, en Sentencia T-105 de 2025, la Ley 70 de 1993 reconoció a las comunidades negras derechos relacionados con la explotación de los recursos en sus tierras. En particular el artículo 27 de la Ley 70 de 1993 reconoce el derecho de prelación, prioridad o exclusividad de los pueblos afrodescendientes para la exploración y explotación de recursos mineros en sus territorios colectivos. A su vez, el Código de Minas, contenido en la Ley 685 de 2001, dispone que las comunidades negras tendrán preferencia para las concesiones en sus zonas mineras.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en orden de garantizar las formas de vida de las comunidades negras y afrocolombianas del bioma amazónico, así como su derecho de prelación, ligado a su derecho al territorio y a la propiedad colectiva, se observa pertinente, a la luz del principio de proporcionalidad, incluir dentro del régimen de excepción de la reserva la posibilidad de que los consejos comunitarios puedan adelantar actividades de minería de pequeña escala, desarrolladas exclusiva y directamente por comunidades negras y afrodescendientes, siempre que dichas actividades se realicen en los territorios colectivos, **en trámite de adjudicación u ocupados ancestralmente por las mismas**, en los términos de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1396 de 2024, y se ejecuten de conformidad con sus planes etnodesarrollo y planes de manejo ambiental o, en su defecto, de los reglamentos internos comunitarios de que trata el artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 1076 de 2015.

Adicionalmente, el artículo 2.2.5.1.5.3 del Decreto 1073 de 2015 define la minería subsistencia como la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección, a cielo abierto, de arenas y gravas de río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, por

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

medios y herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque. La minería de subsistencia, indica el parágrafo de la norma en cita, incluye las labores de barequeo, de que trata el artículo 155 del Código de Minas.

Estas actividades, de conformidad con el artículo 327 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 156 de la Ley 685 de 2001, sólo requieren para su desarrollo la inscripción personal y gratuita ante la alcaldía del municipio donde realizan la actividad y, de efectuarse en terrenos de propiedad privada, obtener la respectiva autorización del propietario. Igualmente, se deben cumplir con las restricciones establecidas en los artículos 157 y 158 de la Ley 685 de 2001.

En consecuencia, toda vez que la minería de subsistencia, en razón a su escala y a los medios empleados, no requiere de título minero, ni de permisos o licencias ambientales, se entenderá excluida dentro de los efectos de la reserva y podrá continuar conforme al marco jurídico vigente.

A partir de los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración y el CONPES 4174-2025, la implementación de acciones de restauración ecológica se sustenta en un diálogo intersectorial participativo con los pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas, quienes han sido actores protagónicos en la planeación y ejecución de las acciones de restauración ecológica en sus territorios. Al integrar este diálogo se garantiza que las acciones de restauración con la participación de las comunidades se consoliden sobre el conocimiento y la gobernanza de su territorio. Esta articulación busca armonizar las metas de recuperación de la selva Amazónica con los planes de vida y sistemas de conocimiento tradicional, reconociendo que la participación social efectiva es el único camino para lograr la sostenibilidad de las intervenciones y la recuperación de la naturaleza perdida en los territorios estratégicos del Amazonas.

#### 4.4. Pequeña minería en proceso de formalización

La minería a lo largo de la historia de Colombia presenta un escenario complejo frente a realidades y problemáticas como la criminalidad, las cosmovisiones ancestrales y la economía de subsistencia que se desarrolla en gran parte del territorio nacional.

La minería informal o minería de hecho es aquella minería de pequeña escala, generalmente tradicional, artesanal o de subsistencia, que se desarrolla en las zonas rurales del país, como una alternativa económica frente a la pobreza y como una forma de obtención de recursos económicos, que permite asegurar la satisfacción del mínimo vital de familias que por tradición se han ocupado del oficio minero como medio de trabajo.

De acuerdo con la Corte Constitucional (Sentencia SU-133 de 2017), la minería informal se diferencia de la minería ilícita, en tanto esta última *“no tiene la intención de legalizarse, porque la destinación de sus recursos es ilegal; en cambio, los mineros de hecho aspiran a obtener un título que les brinde la posibilidad de ejercer la minería como forma de subsistencia. (...) por ello, en virtud de los derechos fundamentales involucrados en este último caso, que la promoción de la formalización minera ha sido entendida como una **obligación del Estado**”*.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

En efecto, la pobreza multidimensional abunda entre la población que ejerce la minería artesanal, tradicional y de pequeña escala, y coincide con la ausencia de condiciones efectivas para la formalización y fomento de esas actividades.

Desde el año 2012, ante la necesidad de reorganizar la actividad minera tradicional, se viene trabajando en estándares legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales que permitan que la pequeña minería sea una actividad económica legal, viable, rentable, segura, ambientalmente sostenible y que contribuya al desarrollo de las comunidades y sus regiones.

En esa perspectiva, el Congreso de la República expidió el régimen especial de formalización y legalización para las poblaciones mineras de pequeña escala, a través de la Ley 2250 de 2022, *“por medio de la cual se establece el marco jurídico especial en materia de legalización y formalización minera, así como para su financiamiento, comercialización y se establece una normatividad especial en materia ambiental”*, definiendo en su artículo 2º la minería tradicional como aquellas actividades que realizan personas naturales o jurídicas, asociaciones o grupos de personas o comunidades o diferentes grupos asociativos de trabajo que explotan minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, que acrediten trabajos mineros en forma continua y una presencia mínima en una zona de explotación minera no menor a diez (10) años a partir de la publicación de dicha ley.

En desarrollo del artículo 5 de la Ley 2250 de 2022, el Ministerio de Minas y Energía publicó el Plan Único de Formalización Minera basado en cuatro (4) ejes fundamentales: enfoque diferenciado; simplificación de trámites y procesos; articulación efectiva entre las instituciones nacionales y locales; y acompañamiento de la autoridad minera en el proceso de legalización y formalización.

De conformidad con la información remitida por la ANM (Rad. 20252200619631 del 16 de octubre de 2025), al interior del bioma amazónico existen tres contratos (un contrato de concesión diferencial y dos contratos especiales de concesión) y 67 solicitudes de títulos (un -1- área de reserva especial declarada, 33 áreas de reserva especial, 22 contratos de concesión diferencial y 11 solicitudes de legalización) relacionados con procesos de formalización.

Ante la necesidad demostrada de delimitar y declarar una reserva sobre los recursos naturales del bioma amazónico frente a las actividades mineras, es preciso adoptar una medida diferencial que, al tiempo que asegure la integridad ecosistémica, contemple los derechos de las comunidades que dependen de los recursos de este territorio para su subsistencia.

En consecuencia, en procura de salvaguardar el derecho al mínimo vital y al trabajo de estos pequeños mineros y generar condiciones para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones, cerrando las brechas de informalidad, se considera pertinente, en primer lugar, permitir la continuidad y ejecución de los contratos de formalización ya celebrados, representados en un (1) contrato de concesión diferencial y dos (2) contratos especiales de concesión, para un área total de 213,17 hectáreas. Lo anterior contemplará igualmente la posibilidad de obtener la licencia ambiental temporal y la licencia ambiental global ante la autoridad ambiental respectiva.



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

En segundo término, el análisis territorial da cuenta de la existencia de un Área de Reserva Especial -ARE- Declarada en el departamento del Putumayo, en una extensión de 80,18 hectáreas. De conformidad con el artículo 11 de la Resolución 546 de 2017, un ARE Declarada presupone la verificación de la existencia de una comunidad minera tradicional y la identificación de un área viable para la formalización. En esa medida, se considera proporcional frente a la medida a adoptar, amparar el ARE declarada y la condición de explotador minero tradicional que la misma otorga, habilitando la delimitación definitiva del ARE y la eventual celebración de Contrato Especial de Concesión Minera, así como la obtención de la licencia ambiental respectiva, bajo el cumplimiento pleno de los estándares ambientales y demás requisitos legalmente establecidos.

Finalmente, la información allegada da cuenta de la existencia de 11 solicitudes de legalización minera, en un área total de 2.166 hectáreas, que hacen referencia a mineros informales que explotan minas, sin título minero inscrito, con anterioridad al 17 de agosto de 2001 y que, por mandato del artículo 165 del Código de Minas, gozan de una prerrogativa de explotación. En consecuencia, toda vez que se trata de actividades de minería realizadas de manera tradicional y de larga data, amparadas en los términos del artículo 165 in fine y la Ley 2250 de 2022, se exceptuarán de los efectos de la reserva y podrán continuar su trámite con miras a la obtención del título y la licencia ambiental respectiva, de conformidad con el marco legal vigente.

El régimen de excepción precedente acata la obligación del Estado, establecida en el ámbito nacional e internacional, de promover la formalización minera (Sentencia C-259 de 2016), y busca evitar un efecto perverso con la adopción de la medida, consistente en la proliferación de la minería ilegal, que es hoy una de las principales causas de la deforestación y de la degradación de las fuentes hídricas en la región, como se advierte en el DTS y ha sido reconocido por las altas cortes del país.

En efecto, un gran porcentaje de la minería que se desarrolla en el país se explota de manera ilícita y no autorizada, sin instrumento de manejo y control ambiental o minero, convirtiéndose en un factor desencadenante de fenómenos como la erosión del suelo, la liberación de sustancias tóxicas (el cianuro y el mercurio), el manejo inadecuado de fuentes de agua y la producción de polvo y ruido por encima de los niveles permitidos.

En conclusión, la protección de un área de especial importancia ecológica y biocultural a través de una reserva definitiva sobre los recursos naturales se considera proporcional en relación con los derechos de los mineros tradicionales, por cuanto se exceptúan de sus efectos los procesos de formalización previamente mencionados, armonizando el deber de protección ambiental con la garantía de sustento, el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana de las y los mineros tradicionales, evitando la imposición de cargas desproporcionadas, al tiempo que se previenen escenarios de ilegalidad y vinculación con economías ilícitas.

En relación a ello, la Corte Constitucional ha señalado que *“La Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la actividad productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental,*

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

*entre otros*” (Sentencia T-204 de 2014), bajo una perspectiva de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza, brindando posibilidades frente a los desafíos y oportunidades que representa la formalización minera.

De esta forma, la constitución de la reserva del bioma amazónico busca concurrir en la superación de la minería desde la perspectiva extractivista, migrando a una minería que responda a los retos de la conservación ambiental, a partir de la formalización de la pequeña minería, impulsando la sustentabilidad de las regiones y el desarrollo de nuevas alternativas productivas.

#### **4.5. Seguridad jurídica de proyectos en curso**

La seguridad jurídica es un principio de rango constitucional que, en términos generales, supone una garantía de certeza para los particulares, en cuanto sus solicitudes sean resueltas conforme a las reglas de juego previamente establecidas (Sentencias T-502 de 2002 y C-145 de 2021). En tal medida, se relaciona directamente con los principios de legalidad y confianza legítima.

La Constitución Política, en su artículo 58, garantiza los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Asimismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales señala que la declaración de la reserva no debe perjudicar derechos legítimamente adquiridos por terceros.

La Corte Constitucional ha manifestado que los derechos adquiridos son *“aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado”*, mientras que son meras expectativas *“aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador”* (C-983 de 2010, citando C-926 de 2000).

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha observado que la protección de los derechos adquiridos no es absoluta ni inmutable, pues el artículo 58 superior permite imponer *“limitaciones, obligaciones o cargas especiales, con el fin de asegurar la función social de la propiedad y de la función ecológica que le es inherente”* (C-147 de 1997). Para la Corte, el mismo artículo 58 establece un parámetro para dirimir conflictos entre los intereses particulares y el interés general, señalando que *“Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”*. En tal medida, la Corte ha precisado, de manera reiterada, que en derecho público es más adecuado hablar de *“situaciones jurídicas consolidadas”*, en lugar de *“derechos adquiridos”* (C-604 de 2000 y C-192 de 2016).

En la misma línea, el Consejo de Estado ha considerado que *“mientras [las situaciones jurídicas derivadas del derecho privado] deben ser respetadas íntegramente a su titular por todos los demás particulares, por la autoridad y por la ley, (...) aquellas que nacen del derecho público son susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la colectividad”* (Sentencia del 20 de marzo de 1970).

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

La administración de los recursos no renovables por parte del Estado en el bioma amazónico ha creado situaciones jurídicas variadas. De acuerdo con la información aportada por la ANM a octubre de 2025, se cuentan 163 títulos mineros inscritos y traslapados con el bioma amazónico en la actualidad. De estos, tres son contratos derivados de procesos de formalización minera y 13 fueron otorgados a comunidades indígenas. Por su parte, existen 284 solicitudes de títulos mineros, 67 asociadas a procesos de formalización.

En cuanto a los hidrocarburos, la información allegada por la ANH a corte de noviembre de 2025 señala la existencia 22 Contratos de exploración y producción (E&P) en fase de exploración; cuatro contratos en fase de evaluación (tres contratos E&P y uno de Exploración y Explotación -E&E), y 14 contratos en fase de explotación (E&P, E&E, Contratos de asociación y Convenios de explotación).

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante Sentencia del 20 de abril de 2022 (Rad. 2013-01580-01), refiriendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, precisó que *“el contrato de concesión para la explotación de recursos naturales no limita la potestad estatal de ejercer control sobre el desarrollo de la actividad, dado que es deber del Estado lograr el uso eficiente de los recursos, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento. Al tanto que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que no existen derechos adquiridos en el contrato de concesión minera, por aplicación del principio de precaución. En este sentido, el hecho de que el Estado haya celebrado un contrato de concesión minera con un particular no impide que luego se prohíba la actividad de explotación respectiva, incluso durante la vigencia del contrato ya suscrito”*.

Siguiendo la jurisprudencia precitada, la existencia de un contrato de concesión sobre la exploración o explotación de los recursos naturales no inhibe la actuación del Estado en procura de la prevención de daño sobre el patrimonio ambiental, asunto de interés general.

No obstante, en aras de reducir la posible afectación al principio de seguridad jurídica y sin menoscabar la idoneidad de los medios utilizados para alcanzar la protección exigida del bioma amazónico, se observa adecuado habilitar de manera excepcional la continuidad de los proyectos de explotación de minerales que se encuentren en curso al momento de declaración de la reserva, los cuales, para ser tales, presuponen la existencia de título minero, instrumento técnico minero (representado en el Programa de Trabajos y Obras -PTO), y licencia ambiental.

Y para el caso de los hidrocarburos, la existencia de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, la licencia ambiental o instrumento ambiental equivalente, y el aviso de descubrimiento, momento a partir del cual inicia la fase de evaluación y se concreta la expectativa exploratoria.

Tales situaciones jurídicas que consolidaron los requisitos técnicos y ambientales para la explotación al momento de entrada en vigor del presente acto, podrán continuar su desarrollo hasta su terminación ordinaria, sin derecho a la prórroga, en razón a la necesidad de evitar ampliar el umbral de impactos acumulativos de la actividad, en los términos ya descritos.

De acuerdo con el análisis de la vigencia jurídica y operativa de los bloques de hidrocarburos existentes actualmente en el bioma amazónico, la distribución

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

muestra que estos se encuentran en una fase predominantemente madura, con un 70% de los contratos próximos a finalizar entre 2037 y 2041, impulsado por la alta participación de bloques en fase de producción. La presencia de pocos contratos con vigencias extendidas (2048–2051) indica que solo una fracción menor corresponde a contratos más recientes o con ciclos de explotación más prolongados. Esta estructura permite anticipar una disminución progresiva de la actividad hidrocarburífera en la región hacia mediados de la década del 2040 y una vigencia máxima estimada a 2051, si no se presentan prórrogas, suspensiones o nuevas declaraciones de comercialidad.

Este marco temporal coincide con las metas en materia de mitigación de GEI del Estado colombiano, incluyendo alcanzar la carbono neutralidad a 2050, entendida como la equivalencia a cero entre las emisiones y absorciones antropogénicas de GEI, la cual quedó establecida por el artículo 5, numeral 2, de la Ley 2169 de 2021.

Estos límites obedecen a los hallazgos científicos internacionales, en particular, a los informes del **IPCC** (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés), que enfatizan la necesidad de una reducción drástica y urgente de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos como clave para limitar el calentamiento global a 1.5°C. En informes recientes, como el AR6 Synthesis Report (marzo 2023), se ha llamado a una disminución del 43% de las emisiones de GEI para 2030, en comparación con niveles recientes (aproximadamente 2019–2020), y de alcanzar la **neutralidad de carbono hacia 2050**, para tener posibilidad de contener el calentamiento global. Esto requiere una acción inmediata y equitativa, que incluya el fin de los combustibles fósiles, una rápida transición a energías renovables, electrificación y soluciones basadas en la naturaleza, antes de que el daño sea irreversible.

De esta manera, considerando la disminución progresiva de la actividad hidrocarburífera en la amazonia hacia mediados de la década del 2040 y una vigencia máxima estimada a 2051, no se considera adecuada la habilitación de las prórrogas contractuales que podrían conducir a una prolongación de la actividad de hidrocarburos más allá de los límites establecidos por la ciencia y la legislación nacional.

Finalmente, se considera pertinente habilitar los trámites de modificación de las licencias ambientales de los proyectos de minería e hidrocarburos en curso, toda vez que hacen parte de las facultades de seguimiento y control de las autoridades ambientales para orientar el adecuado desenvolvimiento ambiental de los mismos. Sin embargo, se imponen limitaciones orientadas a asegurar el cierre previsto de la frontera extractiva.

#### **4.6. Desarrollo territorial de los entes territoriales municipales y departamentales**

El desarrollo territorial se entiende como el desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, y que atiende a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia (Ley 1451 de 2011, orgánica de ordenamiento territorial, artículo 2). De esta forma, el desarrollo territorial contribuye a la realización del Estado Social de Derecho, a la garantía y satisfacción de derechos, e incluso, de manera localizada, permite la materialización del derecho a la paz.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

De otro lado, en desarrollo del principio de autonomía, la Constitución Política les reconoce a los municipios la facultad para ordenar el desarrollo de su territorio y adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

En tal medida, una exclusión absoluta de la explotación minera en todo el bioma amazónico, sin consideración de las necesidades de materiales de construcción para el desarrollo económico y social de los municipios, de la infraestructura vial y demás obras públicas, puede generar una afectación desproporcionada que menoscabe derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la biorregión, considerando que se trata de un territorio históricamente golpeado por la marginalidad y la ausencia del Estado. Al respecto, el DTS señala los altos costos de infraestructura en la región, asociados a su difícil acceso.

Conviene citar la definición de desarrollo sostenible, establecida por el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, entendido como aquél que “conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.

Por consiguiente, atendiendo al principio de desarrollo sostenible de los municipios y a la luz del principio de proporcionalidad, se considera pertinente a habilitar las autorizaciones temporales, de que trata el artículo 116 del Código de Minas, para el aprovechamiento de materiales pétreos por parte las entidades territoriales o sus contratistas, para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas nacionales, departamentales o municipales, con sujeción a las normas ambientales.

Igualmente, habilitar la concesión minera a través de contratos de concesión con requisitos diferenciales, de que trata el artículo 326 de la Ley 1955 de 2019, y el otorgamiento de la licencia ambiental respectiva para los mineros de pequeña escala, beneficiarios de devolución de áreas y comunidades étnicas, única y exclusivamente para la explotación de materiales de construcción, material de arrastre y asfaltita, orientados a proveer los recursos necesarios para las obras públicas y el desarrollo económico y social de la región.

#### **4.7. Cumplimiento de órdenes judiciales y protección del bioma amazónico**

La expedición de la presente resolución se enmarca en el ejercicio legítimo, expreso y reglado de las competencias constitucionales y legales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en particular aquellas orientadas a la protección de ecosistemas estratégicos y a la prevención del deterioro ambiental. Esta actuación administrativa constituye una respuesta coherente y proporcional a las obligaciones derivadas de la Sentencia STC 4360 de 2018, en la que la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó la adopción de medidas estructurales orientadas a detener la deforestación, mitigar el cambio climático y garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras, atendiendo al carácter estratégico del bioma como regulador climático y patrimonio ecológico de la Nación y del mundo.



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Desde esta perspectiva, la exclusión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, así como de licencias, permisos o autorizaciones ambientales asociadas a dichas actividades dentro del área reservada, responde a una aplicación razonable, necesaria y proporcional de los principios constitucionales de prevención, precaución, desarrollo sostenible e intergeneracionalidad. La medida se adopta con vocación prospectiva, sin afectar situaciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos conforme al ordenamiento vigente, y se orienta a garantizar la función ecológica del territorio, en armonía con los compromisos climáticos del Estado colombiano y con el deber de evitar daños graves o irreversibles sobre ecosistemas de alta sensibilidad ambiental.

Asimismo, la resolución proyectada se articula con el llamado judicial a construir el **Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC)**, ordenado en la Sentencia STC 4360 de 2018 como un instrumento de gobernanza ambiental colaborativa, de largo plazo y con enfoque climático. En este marco, la delimitación de una reserva de recursos naturales renovables constituye un desarrollo normativo idóneo para avanzar en el cumplimiento progresivo de dicha orden judicial, al establecer reglas claras de protección territorial, fortalecer la coordinación interinstitucional y contribuir a la contención de actividades extractivas incompatibles con la vocación ecológica del bioma, en consonancia con los lineamientos reiterados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-106 de 2025 frente a los impactos estructurales de la minería —en particular la ilegal— en la Amazonía.

En consecuencia, la declaratoria de la reserva se presenta como una medida técnica, jurídicamente fundada y compatible con el marco constitucional, que permite consolidar una gobernanza ambiental responsable, fortalecer la acción climática del Estado y dar cumplimiento efectivo a las órdenes judiciales vigentes. Desde esta óptica, la resolución reafirma el compromiso del Estado colombiano con la protección del ambiente sano, la justicia ambiental y la preservación de la Amazonía como sujeto de derechos y pulmón del mundo, garantizando un equilibrio razonable entre la protección del patrimonio natural y la seguridad jurídica, en beneficio de las generaciones presentes y venideras.

## 5. SOBRE LA ADOPCIÓN DE PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN

Conforme a lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, y en cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 5 de abril de 2018 (Rad. STC4360-2018), que reconoció a la Amazonía Colombiana como sujeto de derechos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a avanzado en la adopción del Plan Integral de Contención la Deforestación 2023 – 2026 (PICD) y en la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 (ENR), dirigidas a la protección de la biodiversidad, la restauración ecológica, el desarrollo de economías sostenibles, y la mitigación de los efectos del cambio climático, con énfasis en territorios ambientalmente estratégicos como la Amazonía colombiana. Estas acciones son parte de una respuesta estructural al riesgo inminente del denominado punto de no retorno, el cual pone en peligro la estabilidad ecológica del bioma amazónico, con consecuencias regionales y globales.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

Colombia persisten 44 Núcleos Activos de Deforestación (NAD), 70% concentrados en el bioma Amazónico, especialmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Sur del Meta y Putumayo. A través del PICD, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano con las entidades públicas y las autoridades indígenas que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA); las autoridades tradicionales indígenas, las autoridades propias de los territorios indígenas, los consejos indígenas y otras estructuras similares de gobierno propio, y con la participación de los consejos de comunidades negras, las organizaciones campesinas y de cooperación internacional, se proyecta que en 2026 los 44 Núcleos Activos de Deforestación (NAD) se transformen en 28 Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB). El área de intervención de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad en la Amazonia corresponden a 5'046.241 de hectáreas. Esta es la apuesta del Gobierno nacional por consolidar la paz, con justicia social y ambiental en áreas de importancia socio-ecológica territorial para alcanzar la meta de reducción del 20% de la deforestación respecto al 2021.

Por su parte, esta cartera ministerial formuló la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 (ENR) “Juntos para recuperar la naturaleza perdida”, como un instrumento que busca orientar los procesos de restauración de paisajes y su biodiversidad y como una apuesta nacional por recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías, revitalizar los territorios y mejorar el bienestar de las comunidades, con una meta nacional de establecer 753.783 nuevas hectáreas de ecosistemas terrestres y marino costeros bajo procesos de restauración, bajo principios y condiciones habilitantes, las cuales generarán un impacto frente a las crisis de cambio climático y la biodiversidad que a nivel global se están presentando.

En este contexto, la selva amazónica, particularmente el piedemonte amazónico resulta ser un territorio clave que conecta las redes vitales Andino-Amazónicas, Amazónicas-Orinocenses y Pacífico-Amazónicas donde fluye el agua, la biodiversidad, la gente y sus culturas. En la Amazonía Colombiana se registran aproximadamente 4.663.341 hectáreas en integridad muy baja y baja; y 5.706.027 millones de hectáreas en integridad media.

La línea de restauración, desde un enfoque participativo, comunitario y biocultural, propone el establecimiento de acciones de restauración multifuncional, la generación de planes de ordenamiento para la restauración y revitalización productiva, fortalecimiento de capacidades comunitarias para la gestión y apropiación de la restauración, actividades de mantenimiento y monitoreo, con el fin de fortalecer la gobernanza ambiental y la base natural para el desarrollo de economías de la biodiversidad.

En ese sentido, la declaración de Reserva de Recursos Naturales Renovables del bioma amazónico ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades indígenas, autoridades ambientales y demás entidades del SINA, y con la participación activa e incidente de los pueblos indígenas, comunidades negras y afrocolombianas, campesinado, organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional, a promover acciones estratégicas de restauración, conservación, preservación y usos sostenible, con especial énfasis en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad, de conformidad con los componentes

"Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones".

del Plan Integral de Contención de la Deforestación -PICD- (2023-2026), y acciones de restauración en áreas de baja integridad ecológica, de conformidad con la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026.

## 6. CONSULTA PREVIA CON AUTORIDADES ÉTNICAS

Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, establece en su artículo 6 que los gobiernos deberán *"consultar a los pueblos interesados,*

*mediante procedimientos apropiados y en particular a través de su instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente"*.

Que el artículo 330 de la Constitución Política establece en su numeral 5° que los territorios indígenas tienen la función de *"Velar por la preservación de los recursos naturales"* según sus usos y costumbres y que su parágrafo establece que *"La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades"*.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante radicados No. 2025-1-002410-079185 y 2025-1-002410-079448 del 29 de septiembre de 2025, formuló a la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa solicitud de concepto técnico-jurídico de determinación de procedencia de la consulta previa para el proyecto de resolución *"Por medio de la cual se declara una reserva de recurso naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones"*, de la cual se recibió respuesta mediante radicado No. 2025-2-002410-044834 del 9 de octubre de 2025, indicando que es una medida administrativa sujeta al desarrollo de consulta previa.

Que como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelantó el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas del amazonas, representados a través de la \_\_\_\_\_, y con las comunidades negras y afrodescendientes, representadas a través de \_\_\_\_\_, a través de la realización de \_\_\_\_\_, el cual fue debidamente protocolizada como consta en el acta de protocolización No. \_\_\_\_\_ de la fecha \_\_\_\_\_.

## RESUELVE:

**Artículo 1. Objeto.** Delimitar y declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico con carácter definitivo.

**Artículo 2. Ámbito de aplicación.** Las disposiciones que se adoptan en la presente resolución serán aplicables al bioma amazónico, con una extensión de 483.283,55 km<sup>2</sup>, y delimitado mediante la salida gráfica, el archivo geográfico en formato shapefile, en el sistema de referencia horizontal MAGNA-SIRGAS Origen Nacional EPSG 9377, y el cuadro de coordenadas de los vértices, que hacen parte integral del presente acto administrativo (Anexo\_Cartografía).

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

**Artículo 3. Efectos de exclusión de concesión y autorización.** Como consecuencia de la declaración de la Reserva, los recursos naturales renovables y el ambiente del bioma amazónico quedan excluidos de concesión o autorización para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. En virtud de lo anterior, queda excluido en el área reservada:

1. El otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, prerrogativas de explotación, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de minerales.
2. La celebración de nuevos contratos o convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica -TEA, ni cualquier otro tipo de contrato para la exploración o explotación de hidrocarburos.
3. El otorgamiento de nuevas autorizaciones, permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.

**Artículo 4. Alcances de la reserva.** De conformidad con el marco jurídico vigente, la presente declaratoria de la reserva de recursos naturales:

1. No tendrá efectos de exclusión de concesión o autorización de uso, distintos a los dispuestos en el artículo tercero. Por lo anterior, las actividades agrícolas, pecuarias, de infraestructura vial, turismo, salud, educación, y demás, podrán desarrollarse de conformidad con la normatividad aplicable.
2. No afecta el derecho de disposición de los predios privados, ni constituye una limitante para los procesos formalización de la propiedad o de adjudicación de tierras, de carácter individual o colectivo, o de los procesos de constitución de zonas de reserva campesina.
3. No interfiere ni sustituye el ejercicio de competencias y funciones de los Territorios Indígenas, ni el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas en sus territorios y a través de sus estructuras de gobierno propio, ni sus competencias en materia ambiental, de acuerdo con lo establecido en los Decretos Ley 1953 de 2014, 632 de 2018, 1275 de 2024, 488 de 2025 y demás normatividad aplicable.
4. No interfiere ni sustituye la autoridad y gobierno de los Consejos Comunitarios en los territorios colectivos de comunidades negras y afrodescendientes, ni el ejercicio de sus competencias en materia ambiental y minera, así como los usos por ministerio de la ley, de conformidad con la Ley 70 de 1993, el Decreto 1384 de 2023 y el Decreto 1396 de 2023.
5. No modifica el régimen jurídico de las áreas protegidas, otras estrategias de conservación *in situ* u otras determinantes ambientales existentes en el área reservada, a excepción de las consecuencias jurídicas y administrativas descritas en el artículo tercero, siempre que estas no sean menos restrictivas frente al desarrollo de actividades de minería e hidrocarburos.
6. No interfiere ni sustituye el ejercicio de las autoridades ambientales, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia.

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

**Artículo 5. Régimen de excepción.** De conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución, se exceptúan de los efectos de exclusión o autorización las siguientes situaciones jurídicas:

1. Las autorizaciones temporales para el aprovechamiento de materiales pétreos por parte de las entidades territoriales, de que trata el artículo 116 de la Ley 685 de 2001.
2. Los proyectos de explotación minera de pequeña escala, en los términos del artículo 326 de la Ley 1955 de 2019, para la extracción de materiales de construcción, material de arrastre y asfaltita, adelantados con objeto del desarrollo social y económico de los municipios, así como la reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas.
3. Las actividades de minería de subsistencia, incluyendo las labores de barequeo, en cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
4. Las actividades de explotación de minería de pequeña escala, desarrolladas exclusiva y directamente por los pueblos y comunidades indígenas, siempre que dichas actividades se realicen en las Zonas Mineras Indígenas previamente delimitadas por la autoridad minera al interior del bioma amazónico, de que trata el artículo 122 y siguientes de la Ley 685 de 2001, y se ejecuten de conformidad con sus Planes de Vida.
5. Las actividades de explotación de minería de pequeña escala, desarrolladas exclusiva y directamente por comunidades negras y afrodescendientes, siempre que dichas actividades se realicen en los territorios colectivos, **en trámite de adjudicación u ocupados ancestralmente por las mismas**, en los términos de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1396 de 2024, y se ejecuten de conformidad con sus planes etnodesarrollo y planes de manejo ambiental o, en su defecto, los reglamentos internos.
6. Los contratos especiales de concesión y los contratos de concesión diferencial celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente acto, los cuales podrán adelantar los trámites necesarios para obtener el instrumento técnico y la licencia ambiental global.
7. Las Áreas de Reserva Especial declaradas y las solicitudes de legalización en trámite a la fecha de entrada en vigor de la presente resolución, las cuales podrán continuar su proceso de formalización para la obtención de título minero y las autorizaciones ambientales correspondientes.
8. Los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigentes, los cuales podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin lugar a prórroga. Las solicitudes de modificación de licencia ambiental serán procedentes respecto de los mismos, salvo cuando su objetivo sea la ampliación de nuevas áreas mineras o el aumento de los volúmenes de explotación, respecto de los inicialmente autorizados.
9. Los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollen a través de Contratos de Exploración y Producción, Contratos de asociación o Convenios de Exploración, que cuenten con Aviso de Descubrimiento y licencia ambiental o instrumento ambiental equivalente, los cuales podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin lugar a prórroga. Las solicitudes de modificación de



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

licencia ambiental serán procedentes respecto de los mismos, salvo cuando su objetivo sea la ampliación de nuevas áreas o cuando se requiera modificar la demanda, uso y/o aprovechamiento de uso de recursos naturales renovables.

**Parágrafo 1.** Las excepciones establecidas en el presente artículo no obstan del cumplimiento estricto de la normatividad ambiental y la obtención, en caso de requerirse, de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales respectivas.

**Parágrafo 2.** En los proyectos de hidrocarburos, de que trata el numeral 9 del presente artículo, serán procedentes las obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos del sector hidrocarburos, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 0855 de 2022 o lo que establezca la autoridad ambiental competente.

**Parágrafo 3.** La autoridad minera podrá definir y reservar Zonas Reservadas con Potencial con el objeto evaluar el potencial de minerales estratégicos para la transición energética justa y, de ser procedente, delimitar y declarar Áreas Estratégicas Mineras al interior del bioma amazónico, para lo cual deberá valorar los impactos acumulativos que se pueden llegar a presentar en el mismo, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demás autoridades ambientales competentes. En dichas áreas, la autoridad minera podrá otorgar áreas para la explotación a pequeña escala de minerales estratégicos para la transición energética justa, mediante procesos de selección objetiva, observando la garantía del derecho fundamental a la consulta previa.

**Artículo 6. Planes, programas, proyectos y acciones de restauración, conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades indígenas, las autoridades ambientales, las demás entidades del SINA y de los otros sectores administrativos, y con la participación de los pueblos indígenas, las comunidades negras y afrocolombianas, campesinado, organizaciones no gubernamentales, de base comunitaria y de cooperación internacional, promoverá, formulará y avanzará en la implementación de programas, planes, proyectos y acciones orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico, así como de uso o manejo sostenible de los mismos.

**Artículo 7. Enfoque de los planes, programas y acciones de restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico.** La formulación y desarrollo de los programas, planes y proyectos orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico, así como de uso y manejo sostenible de los mismos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las entidades del SINA y demás actores deberán tomar en consideración:

1. Promover el tránsito de núcleos activos de deforestación hacia Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, de conformidad con la Política de Deforestación y de Crecimiento Verde (Documentos CONPES 4021 y 3934), el Plan Nacional de Restauración, el Plan Integral de Contención de la Deforestación

“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

-PICD- (2023-2026), la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, entre otros.

2. Priorizar acciones estratégicas, planes, proyectos y programas en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad, de conformidad con lo previsto en la Política de Deforestación y de Crecimiento Verde (Documentos CONPES 4021 y 3934), el Plan Nacional de Restauración, el Plan Integral de Contención de la Deforestación -PICD- (2023-2026), la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, entre otros.

3. Propender por el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad, el manejo forestal sostenible y la bioeconomía, entre otros, a fin de contener la deforestación y como alternativas productivas para el bioma amazónico.

4. Estar dirigidos a las comunidades locales, campesinas y étnicas, y organizaciones de base comunitaria que cuenten con arraigo territorial en el bioma amazónico.

#### **Artículo 8. Incorporación y actualización de los sistemas de información.**

Dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, comunicará el presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para que incorporen la Reserva de Recursos Naturales Renovables del Bioma Amazónico en el Sistema Integral de Gestión Minera -SIGM- y en el Mapa de Tierras de áreas hidrocarburíferas, respectivamente, o en los sistemas de información que hagan sus veces, a fin de garantizar la eficacia de la declaratoria.

**Artículo 9. Comunicaciones.** Comuníquese la presente Resolución al Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI”, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena CORMACARENA, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA, la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC, la Corporación Autónoma Regional de Nariño -CORPONARIÑO, las Gobernaciones de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Cauca, Nariño y Meta, las alcaldías municipales del área declarada, los territorios indígenas formalizados y en proceso de formalización como Entidades Territoriales Indígenas, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Minero Energéticos.

**Artículo 10. Vigencia del acto administrativo.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D.C., a los xxx ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ de 2025.



“Por medio de la cual se delimita y declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**IRENE VÉLEZ TORRES**

Ministra (E) de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyectó: Espacio según se considere

Revisó: xxxxxxxxxxxxxxxxx